

NEW LEFT REVIEW 137

SEGUNDA ÉPOCA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

EDITORIAL

SUSAN WATKINS Cinco guerras en una 7

ARTÍCULOS

GÖRAN THERBORN El mundo y la izquierda 25

FRIGGA HAUG Recuerdos de aprendizaje 83

FORREST HILTON Y
AARON TAUSS Colombia en la encrucijada 95

EDWARD KING La novela histórico-mundial 139

CRÍTICA

ANAHID NERSESIAN El librero de la libertad 155

SAUL NELSON Realidades opuestas 163

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE

ts
traficantes de sueños



COLOMBIA EN LA ENCRUCIJADA

EL 19 DE junio de 2022 Gustavo Petro se convirtió en el primer candidato de izquierda en ganar unas elecciones presidenciales en Colombia. Obtuvo en segunda vuelta el 50,4 por 100 de los votos, frente al candidato de la derecha, el promotor inmobiliario Rodolfo Hernández, al que votaron el 47,4 por 100 de los electores¹. La participación, del 58 por 100, fue la más elevada en veinticinco años. El bloque electoral de Petro, Pacto Histórico, ya había ganado 48 de los 268 escaños del Congreso en las elecciones legislativas celebradas en marzo de 2022. Para poner estas victorias en perspectiva necesitamos conocer la naturaleza del bloque de poder que gobernó Colombia durante más de ciento cincuenta años, dirigido por un duopolio oligárquico conservador-liberal que a partir de 2002 dio paso al régimen contrainsurgente de extrema derecha liderado por Álvaro Uribe. Con respaldo de Washington, Uribe intensificó la vieja guerra del ejército colombiano contra las guerrillas en las zonas rurales; las víctimas, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, incluyen 450.566 muertos y otros 121.768 «desaparecidos», así como 50.770 secuestrados y 8 millones de desplazados, en su mayoría campesinos pobres. Uribe y sus sucesores –Juan Manuel Santos (2010-2018) y, en especial, Iván Duque (2018-2022)– apostaron también por aplicar severas medidas neoliberales contra los pobres urbanos.

¹ Los autores desean dar las gracias a sus antiguos alumnos/as y compañeros/as de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Este ensayo está dedicado a la memoria de Campo Elías Galindo, profesor y sindicalista de la Universidad de Antioquia y representante de Colombia Humana en las elecciones de 2018, asesinado por las fuerzas reaccionarias en 2020.

La victoria electoral de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez – hija de mineros afrocolombianos y defensora activa de los derechos de estos– ha ido unida a las enormes protestas urbanas, que han agitado el país durante los últimos años. Millones de manifestantes, los «nadies» –muchos de ellos jóvenes de clase trabajadora residentes en las periferias urbanas, con un acceso a los servicios públicos y una educación mínimos–, tomaron las calles, paralizando una y otra vez las ciudades colombianas en 2018, 2019 y 2021, enfrentándose a los antidisturbios con valor, energía y disciplina ejemplares, para poner fin a la «horrible noche» –un verso del himno nacional– del uribismo. Los medios de comunicación oligárquicos intentaron, sin lograrlo, etiquetar a los manifestantes de pirómanos y saqueadores. Tanto estudiantes como jóvenes de clase trabajadora y procedentes de los barrios periféricos exigían alternativas al confinamiento de Colombia en el neoliberalismo, en el patriarcado violento, en la narcoeconomía y en la delincuencia organizada.

Petro ha prometido mejorar la sanidad pública, la educación –universidad gratuita, condonación de las deudas por créditos de estudios– y las pensiones; fortalecer el derecho laboral; ofrecer perspectivas de empleo a los jóvenes empobrecidos; luchar contra la discriminación racial y de género; y mitigar la violencia endémica, la pobreza y la destrucción medioambiental en zonas mineras, proveedoras de energía y agroindustriales, como las del Pacífico sudoriental, en las que Márquez ha hecho campaña. Además de defender la transición verde, prometiendo no conceder nuevos contratos para la extracción de combustibles fósiles, Petro se ha comprometido a reavivar el vacilante proceso de paz con los antiguos insurgentes de las FARC y poner en marcha las recomendaciones de la Comisión de la Verdad colombiana, que aconseja establecer conversaciones con la guerrilla todavía activa del ELN. Su gobierno está normalizando los lazos bilaterales y los flujos migratorios con la vecina Venezuela. El embajador colombiano en Venezuela se reunió con Maduro y afirmó que ambos presidentes se reunirían antes de que terminara el año, como de hecho sucedió en noviembre pasado en Caracas.

A pesar del pasado guerrillero de Petro en la década de 1980, de su apoyo inquebrantable a los artículos socialdemócratas incluidos en la Constitución de 1991, del anuncio de que revisará los tratados de libre comercio, y de que planea prohibir la aspersión aérea de herbicidas exfoliantes como el glifosato en las regiones cocaleras –una política liderada

por Estados Unidos que ha expulsado a los pequeños campesinos de sus tierras y los ha echado en manos de la delincuencia organizada–, Washington se ha tomado su elección con relativa tranquilidad. El secretario de Estado de Biden telefoneó a Petro al día siguiente de la elección y, como explicó el Departamento de Estado, «comentaron que la estrategia integrada antidrogas de Estados Unidos y Colombia» coincidía con el objetivo petrista de disminuir la violencia rural². El cartagenero Juan González, asesor de Biden para América Latina, y Samantha Power, en la actualidad administradora de USAID, fueron más explícitos. En agosto, González comentó, ante los dos mil empresarios asistentes al congreso anual de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) celebrado en Cartagena, que «hace cuarenta años Estados Unidos habría hecho todo lo posible por evitar la elección de Gustavo Petro y una vez elegido habría hecho todo lo indecible para sabotear su proyecto». Hoy, sin embargo, en un «espíritu de diálogo», Washington desea ayudar al gobierno de Petro a «reconfigurar» las cuestiones clave –política antidrogas, seguridad, paz– «en puntos de interés común». En el mismo viaje, Power fue más contundente: «Necesitamos conversar en profundidad para delimitar el programa que vamos a aplicar juntos»³.

Petro ha hablado con más franqueza que muchos líderes de la izquierda latinoamericana contemporánea acerca del carácter del bloque gobernante en su país. Como comentó a *El País* el año pasado, el sistema electoral colombiano ha sido «cooptado por una serie de totalitarismos regionales *de facto* donde las poblaciones viven bajo el terror y los candidatos los imponen quienes tienen las armas y el dinero. La mafia colombiana detenta poder político, se mueve dentro de las instituciones del Estado, puede hacer leyes de la República»⁴. Pocos han denunciado de manera más pública o con más eficacia que Petro el dominio de estos terratenientes narcotraficantes, que controlan grandes porciones del país a través del clientelismo armado. La sociedad y la política violentamente conservadoras de Colombia parecieron distanciar durante mucho tiempo su historia respecto a la de países vecinos como Ecuador, Brasil,

² Departamento de Estado de Estados Unidos, «Secretary Blinken’s Call with Colombian President-Elect Petro», 20 de junio de 2022.

³ Fabián Ramírez, «Juan González: “Hace 40 años, EEUU hubiera hecho todo lo posible para prevenir elección de Petro”», *Noticias Caracol*, 10 de agosto de 2022; Fabián Ramírez, «Delegación de EEUU se reunió con Petro y halló “diferencias entendibles” sobre lucha antidrogas», *Noticias Caracol*, 8 de agosto de 2022.

⁴ Jan Martínez Ahrens e Inés Santaaulalia, «Entrevista a Gustavo Petro: “Colombia no necesita socialismo, necesita democracia y paz”», *El País*, 19 de septiembre de 2021.

Venezuela o Perú. La tentación ahora es considerar que Colombia se ha incorporado por fin a la segunda oleada de los movimientos progresistas que recorre de nuevo América Latina o que el país ha alineado sus movilizaciones antineoliberales, lideradas por los jóvenes, con las que en 2018-2021 barrieron las ciudades de Chile, Ecuador, Paraguay y Panamá, las cuales retrocedieron temporalmente debido a la represión y a la pandemia de la COVID-19, que afectó con más dureza a América Latina y el Caribe que a cualquier otra región del mundo, para resurgir tras el fin de esta.

Ambas perspectivas resaltan importantes elementos en común. Este ensayo pretende, sin embargo, abordar la victoria electoral de Petro en el contexto de la historia colombiana para a continuación considerar el paisaje regional desde una perspectiva más amplia. A finales de la década de 1990, la crisis de representación estaba muy extendida entre los partidos tradicionales de América Latina, pero solo en Colombia los partidos oligárquicos del siglo XIX lograron conservar el control del sistema electoral –un sistema excluyente y marcado por repetidos episodios de guerra civil y asesinatos facciosos que hicieron mella en el país en las décadas de 1890-1900, 1940-1950 y 1980-1990– y excluir a las nuevas fuerzas populares de cualquier representación parlamentaria independiente y mínimamente significativa hasta finales del siglo XX. Finalmente, en 2002 la guerra contra la insurgencia permitió a la derecha relacionada con el narcotráfico hacerse con el poder, formando parte de una amplia coalición liderada por Uribe que marginó a los restos de la vieja diarquía liberal-conservadora. A continuación, por lo tanto, aunque adoptamos una visión hemisférica de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia –en especial en lo que respecta a los conglomerados transnacionales, los flujos de inversiones, las drogas ilegales, las finanzas y el comercio, tanto lícito como ilícito– nos centramos en el interior, en los factores endógenos, para explicar la victoria de Petro y Márquez, y examinamos qué podría augurar dicha victoria.

Enfrentarse a la arraigada estructura social de Colombia será una cuestión de orden mayor, pero hay cambios en marcha. ¿Serán sustanciales y duraderos, en lo referente a las instituciones estatales y a la distribución de la riqueza, o simbólicos y efímeros? ¿Llevarán a la extrema derecha colombiana a reorganizarse bajo un nuevo liderazgo? ¿Será posible alterar la estructura de la economía exportadora extractiva para corregir la concentración extrema de riqueza que sufre el país? ¿Reformará Petro

la policía y el ejército apoyados por Estados Unidos? ¿Logrará controlar las organizaciones neoparamilitares que operan en buena parte del país? ¿Puede proteger los derechos de los ciudadanos a reunirse, manifestarse, expresar opiniones y votar sin miedo a una represión homicida, tanto estatal como paraestatal? ¿O pesarán más las continuidades, en especial en la colosal burocracia de la represión, pero también en el sistema financiero, la enseñanza, la tierra y la sanidad, que los cambios en la propia sociedad? A estas alturas solo podemos esbozar respuestas parciales a estas preguntas y plantear hipótesis fundamentadas acerca de otras que se revelarán con el tiempo en el contexto general de las evoluciones regionales, en especial de las acaecidas en Brasil y Venezuela. Nos sentimos a la vez esperanzados, visto el avance de Petro y Márquez hacia la Casa de Nariño que enseguida analizaremos, y escépticos, ante las poderosas fuerzas a las que se enfrentan y los mensajes contradictorios lanzados ya por los nombramientos ministeriales efectuados y las alianzas establecidas en el Congreso.

Las guerras de la oligarquía

La historia colombiana se presenta a menudo como una paradoja: por una parte, el país ha sido durante mucho tiempo un modelo de estabilidad política y económica, «una nación a pesar de sí misma», con elecciones regulares y partidos de gobierno alternantes y comprometidos con políticas crediticias de primera calidad; por otra, ha estado afectado casi desde el comienzo por insurgencias políticas de carácter violento sin que se hayan registrado contradicción alguna aparente entre ambos fenómenos⁵. Es cierto que en comparación, digamos, con Argentina, Bolivia, Perú o Ecuador, que han padecido golpes de Estado, dramáticas rupturas institucionales y turbulencias económicas, la continuidad del gobierno parlamentario en Colombia resulta asombrosa. Y aun siendo legendaria, su violencia no es ni tan endémica en la historia del país como sugieren los argumentos sobre la «cultura de la violencia» —endémicos en sí mismos (además de circulares)—, ni tan específica: solo tenemos que mirar a México o a Centroamérica para encontrar casos en los que las redes de violencia criminal superan la capacidad de control del Estado y de la sociedad y se han fundido con ambos.

⁵ David Bushnell, *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself*, Berkeley (CA), 1993 [ed. cast.: *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, 1994]; Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Fragmented Land, Divided Society*, Nueva York, 2001 [ed. cast.: *Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida*, Bogotá, 2002]; Marco Palacios, *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*, Bogotá, 2012; Daniel Pécaut, *Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953*, Bogotá, 1987.

Lo que diferencia a Colombia es, en primer lugar, el pugnaz sistema político bipartidista establecido a finales de la década de 1840, décadas antes de que las fronteras del Estado hubieran asumido su forma actual. El peso demográfico del país se situaba, y sigue situándose en gran medida, en las zonas coloniales interiores de las cordilleras Oriental y Central (la cordillera Occidental y el sudoeste, el gran Cauca, crecerían en el siglo xx). Colombia era, por supuesto, masivamente rural, con una infraestructura de transportes mínima, excepto el río Magdalena, y políticamente sobre-determinada por su épica diferenciación geográfica: imponentes cadenas montañosas, que separan las ciudades entre sí y aíslan tanto el litoral atlántico como el pacífico; cientos de kilómetros de tierras llanas ecuatoriales escasamente habitadas en el sudeste, que forman una enorme frontera interna. En este paisaje profundamente fragmentado, las rivalidades partidistas estuvieron desde el comienzo intensamente localizadas, compuestas por redes regionales de clientelismo y mecenazgo, que descendían por la escala social hasta abarcar a pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, ocupantes de terrenos, trabajadores sin tierra y asalariados. Divididos originalmente por cuestiones de clericalismo y federalismo, ambos partidos, el Liberal y el Conservador, podían así movilizar coaliciones interclasistas y multiétnicas. Este partidismo sectario y belicoso, sumado a la lucha por el poder nacional que libraban entre sí grupos dominantes fragmentados regionalmente, condujo a innumerables guerras civiles de pequeña escala, que culminaron en 1899 en la Guerra de los Mil Días, extendida por las regiones de Santander, el Cauca, Tolima y el Caribe en una matanza mutua que dejó aproximadamente 100.000 muertos, campesinos analfabetos la mayoría de ellos. Paradójicamente, los conservadores victoriosos adoptaron entonces el programa económico de sus viejos enemigos liberales, usando las instituciones estatales para obtener préstamos y créditos y construyendo infraestructuras –carreteras y ferrocarriles– para sostener una economía basada en la exportación de café⁶.

Como en otras partes, la oligarquía formada por los conservadores y los llamados liberales independientes (1880-1930) excluyó en gran medida

⁶ Charles Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910*, Durham (NC), 1978 [ed. cast.: *Café y conflicto en Colombia (1886-1910). La Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias*, Bogotá, 1999]; Helen Delpar, *Red against Blue. The Liberal Party in Colombian Politics, 1863-1899* (2ª ed.), Tuscaloosa (AL), 2010 [ed. cast.: *Rojos contra azules. El Partido Liberal en la política colombiana, 1863-1899*, Bogotá, 1994; traducido de la edición original de 1981]; Nancy Appelbaum, *Muddied Waters: Race, Region and Local History in Colombia, 1846-1948*, Durham (NC), 2003.

de la participación política a las clases populares al imponer condiciones de propiedad y alfabetización: antiguos esclavos, negros libres, indígenas, artesanos y campesinos mayoritariamente mestizos/mulatos/zambos, que vivían y trabajaban como aparceros, arrendatarios, ocupantes ilegales de terrenos y colonos de frontera fueron expulsados, pues, de la vida política⁷. A diferencia de Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil o México, sin embargo, no surgió ninguna representación o liderazgo político consolidado de carácter nacional-popular antes de la década de 1930 capaz de oponerse a la oligarquía comercial-terrateniente, cuando los liberales volvieron al poder tras cincuenta años en el desierto político. En lugar de resolver su conflicto sectario, los grupos dominantes de ambos partidos habían formado nuevas facciones, alimentando nuevos agravios. Por aquel entonces ya existían pequeñas bolsas de obreros organizados en el río Magdalena y en otras partes del país en las que el Partido Socialista Democrático, una naciente agrupación comunista, encontró su base operativa. Inicialmente, los líderes liberales intentaron acrecentar sus filas mediante alianzas con los obreros sindicalizados y las ligas campesinas, pero los primeros tímidos intentos de aprobar una mínima legislación laboral y de acometer una reforma agraria moderada, efectuados durante el mandato de Alfonso López Pumarejo a finales de la década de 1930, fueron denunciados por los conservadores profranquistas como la senda hacia el terror rojo, siendo rápidamente revertidos. En 1945 el propio gobierno liberal estaba librando una guerra contra los trabajadores organizados al hilo de la represión de la huelga de remeros del río Magdalena⁸. En cuanto los conservadores recuperaron el poder en 1946, pusieron a las fuerzas de seguridad en contra de los políticos liberales radicales y sus partidarios, que formaron redes guerrilleras de autodefensa. Se creó así un escenario de asesinatos y ajustes de cuentas sectarios, que se materializaron principalmente en Boyacá y los Santanderes, para después contagiarse a todo el país. El periodo de La Violencia duró más de una década y dejó en torno a 200.000 muertos, de nuevo campesinos analfabetos en su mayoría⁹.

⁷ James Sanders, *Contentious Republicans. Popular Politics, Race and Class in Nineteenth-Century Colombia*, Durham (NC), 2003; [ed. cast.: *Republicanos indóctiles. Política popular, raza y clase en Colombia, siglo XIX*, Bogotá, 2017].

⁸ El Partido Comunista de Colombia estaba maniatado en este periodo por haber apoyado sin condiciones a López Pumarejo en la época del Frente Popular y la Segunda Guerra Mundial («browderismo»); véase Medófilo Medina, *Historia del Partido Comunista de Colombia*, Bogotá, 1980.

⁹ Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez, *Violence in Colombia. The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Wilmington (DE), 1992; Mary Roldán, *Blood and Fire. La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*, Durham (NC), 2003; [ed. cast.: *A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953*, Bogotá, 2003].

La debilidad y la fragmentación obreras en el siglo xx se debieron en parte al peso que en la economía nacional tenía el sector cafetero en el que predominaban los pequeños propietarios, además de a la ocupación de tierras, la aparcería y el arriendo, y en el que los campesinos vendían sus cosechas a comerciantes-prestamistas ricos posicionados en el sistema bipartidista de patronazgo y clientelismo, un juego de suma cero que enfrentaba a los pequeños propietarios entre sí y asignaba una función prioritaria a los intermediarios comerciales¹⁰. Ello contribuyó a garantizar que los avances de la clase obrera independiente se limitaran a enclaves regionales, mientras que el radicalismo se hallaba disperso y dividido, contenido en ciertos sindicatos, fábricas o distritos urbanos, o desperdigado por las distantes fronteras agrarias y bloqueado por una pequeña burguesía hipertrofiada de intermediarios. La ausencia de proyecto político popular alguno de alcance nacional se confirmó trágicamente en las insurgencias urbanas que siguieron al asesinato el 9 de abril de 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, la única figura populista de izquierda de alcance nacional surgida de las filas liberales. Ese día se suponía que Gaitán debía almorzar en Bogotá con un joven líder estudiantil de La Habana, Fidel Castro. Mientras veía las multitudes saquear y quemar el centro histórico de la capital, Castro concluyó que Colombia carecía de la organización y el liderazgo políticos necesarios para canalizar la furia popular desatada por el asesinato de Gaitán hacia sendas revolucionarias. Aunque por todo el país se crearon juntas, esto es, órganos locales de autogobierno, no hubo coordinación ni cooperación entre ellas y el ejército las desmanteló con facilidad. Castro estaba en lo cierto¹¹.

Del pacto elitista a la insurgencia

Durante la Guerra Fría el capitalismo colombiano, atado firmemente a la órbita estadounidense, siguió siendo en gran medida oligárquico. En 1957 los líderes de los dos partidos limaron asperezas en un «pacto de

¹⁰ Charles Bergquist, *Labour in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia*, Palo Alto (CA), 1986 [ed. cast.: *Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia*, Bogotá, 1988]; Lesley Gill, *A Century of Violence in a Red City. Popular Struggle, Counterinsurgency and Human Rights*, Durham (NC), 2016.

¹¹ Herbert Braun, *The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia*, Madison (WI), 1986 [ed. cast.: *Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia*, Bogotá, 1987]; Ignacio Ramonet, *My Life. A Spoken Biography by Fidel Castro*, Londres y Nueva York, 2008, pp. 98-99 [ed. cast.: *Fidel Castro, biografía a dos voces*, Barcelona, 2006, pp. 111-112]; Gonzalo Sánchez Gómez, *Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia*, Bogotá, 1983.

caballeros», que les permitiría alternarse en el gobierno por medio de un Frente Nacional (1958-1974), que repartía el poder equitativamente entre liberales y conservadores y que excluiría de nuevo rígidamente a los competidores de izquierda. En las décadas de 1960 y 1970, en medio de una crisis agraria creciente y el colapso del paradigma de modernización desarrollista a escala nacional, la oposición política desde abajo fue reprimida o se vio obligada a tomar las armas. Inspiradas en parte en la Revolución Cubana, a mediados de la década de 1960 surgieron tres pequeñas insurgencias rurales, las FARC, el ELN y el EPL, aunque dado el carácter campesino de sus líderes, las FARC consideraban que tenían más que enseñarle a Castro que aprender de él, en especial en lo que a la lucha guerrillera se refería¹².

La crisis que sufrió el campo en la década de 1970, provocada en parte por la subdivisión de las pequeñas propiedades hasta el punto en el que dejaban de sostener familias amplias, y asimismo por la reconfiguración del mercado cafetero mundial, ayudó a potenciar la expansión de nuevos asentamientos informales en las periferias de las ciudades, en gran medida no representados por los gobiernos del Frente Nacional, los cuales organizaron sus propios movimientos vecinales y cívicos en barrios carentes de servicios públicos tan básicos como el alcantarillado, la electricidad, el asfaltado de las calles y el suministro de agua. Aunque los partidos gobernantes empezaron a establecer dispositivos clientelares vecinales en los barrios pobres, un porcentaje importante de este nuevo proletariado no votaba y así las tasas de abstención superaron el 50 por 100 durante todo el periodo del Frente Nacional. La militancia estudiantil

¹² Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se formaron con apoyo del Partido Comunista en 1966, aunque hay quien retrotrae su fundación a una fracasada campaña de contrainsurgencia previa apoyada por Estados Unidos en 1964, la Operación Marquetalia; sus baluartes históricos estaban en el Cauca, el sur del Tolima y las fronteras agrarias de los departamentos amazónicos del Meta, Caquetá y el Guaviare. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) fue creado en 1965 por seguidores de Castro y Guevara en los sindicatos y en las fronteras rurales de Santander en el nordeste. El EPL (Ejército Popular de Liberación), fundado en 1967 con el respaldo del PCC-ML de tendencia maoísta, estaba también aislado geográficamente en las fronteras situadas entre el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Las tres organizaciones personificaron la experiencia de la lucha de guerrillas durante el periodo de La Violencia; no suponían una amenaza para la actividad bipartidista en las ciudades. Véase James Henderson, *Modernization in Colombia: The Laureano Gómez Years*, Gainesville (FL), 2001; Darío Villamizar, *Las guerrillas*, Bogotá, 2018; Mauricio Archila et al. (eds.), *Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia*, Bogotá, 2009; Eduardo Pizarro Leongómez, *Las FARC, 1949-1966. De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, 1991.

en las universidades públicas –especialmente en Cali y Medellín, pero también en Bogotá y Barranquilla– y el movimiento obrero organizado aumentaron la creciente sensación de descontento urbano a medida que los militantes de base organizaban huelgas y acciones directas fuera de las configuraciones basadas en los partidos oficiales¹³. En este contexto se fundó el Movimiento 19 de Abril, el M-19, un producto de la izquierda urbana inspirado en los tupamaros uruguayos y en los montoneros argentinos. El M-19 robó una de las espadas del Libertador de la Casa Museo Quinta de Bolívar para indicar sus intenciones. El paro cívico de 1977 representó una confluencia de estas corrientes de protesta –estudiantes, trabajadores organizados (liderados por docentes) y movimientos cívicos comunitarios– contra el aumento del coste de la vida en una situación de inflación del 35 por 100 y contra las medidas de excepción impuestas por el gobierno liberal de López Michelsen, que desató una represión brutal. Los activistas fueron perseguidos, asesinados o «desaparecidos» en una guerra sucia que impediría la cohesión de la izquierda urbana¹⁴.

En esta fase, el gigantesco mercado estadounidense introdujo un nuevo ingrediente en la volátil mezcla colombiana. La expansión dinámica de la economía de la cocaína desde finales de la década de 1970, apoyada en las redes existentes de exportación de marihuana, introdujo nuevos actores en el espacio político¹⁵. La nueva riqueza de los narcotraficantes pronto se abrió camino hacia el sector inmobiliario, la ganadería, el transporte y el sector automovilístico, el sector financiero, los deportes, la arquitectura, las artes y el ocio, la construcción y la política local, fortaleciendo en especial el poder de los liberales, mientras los escuadrones de sicarios que los narcos sostenían para mantener a raya a los rivales formaron el núcleo de los grupos paramilitares de extrema derecha, que pronto se convertirían en parte del nuevo bloque histórico conformado en la política colombiana. Pero la coca ofreció también a los pequeños ejércitos guerrilleros una nueva fuente de financiación, en tanto que

¹³ Mauricio Archila, *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*, Bogotá, 2003.

¹⁴ Medófilo Medina, *La protesta urbana en Colombia en el siglo veinte*, Bogotá, 1984; Mauricio Archila, «El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977: un ejercicio de memoria colectiva», *Revista de Economía Institucional*, vol. 18, núm. 35, noviembre de 2016; Álvaro Delgado Guzmán, «Ricardo Sánchez Ángel: ¡Huelga! Luchas de la clase trabajadora en Colombia, 1975-1981», *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 36, núm. 1, 2009.

¹⁵ Eduardo Sáenz Rovner, *Conexión Colombia*, Bogotá, 2021.

defensores armados de los campesinos contra la manipulación de los intermediarios, consistente en una nueva gran base campesina. El ejército colombiano y los escuadrones paramilitares de los narcos unieron fuerzas para darles caza, aunque los pequeños agricultores y los aldeanos sufrieron mucho más las operaciones de contrainsurgencia que los propios guerrilleros¹⁶. A su vez, la izquierda urbana sería tildada por asociación de «insurgente» y «terrorista».

En las décadas de 1980 y 1990 la contrainsurgencia constituyó, por lo tanto, el tercer proceso políticamente excluyente, tras la oligarquía del siglo XIX y la diarquía del Frente Nacional durante la Guerra Fría. Sobre este telón de fondo, las medidas compensatorias para promover el desarme de la izquierda, implementadas por Belisario Betancur a comienzos de la década de 1980, o para lanzar una renovación constitucional, como la planteadas en tiempos de César Gaviria en 1991, no podían sino quedar debilitadas por los paramilitares y sus jefes. Cuando los dirigentes de las FARC intentaron presentarse a las elecciones locales, con el nombre de Unión Patriótica, los sicarios se encargaron de asesinarlos: mataron a más de cinco mil. El intento por parte del M-19 de reanudar el proceso de paz tomando el Palacio de Justicia y pidiendo a Betancur que cumpliera sus promesas acabó en desastre, cuando el gobierno entregó el control de la situación al ejército, que lo recuperó con ferocidad asesina, matando a casi cien personas, incluidos once magistrados de la Corte Suprema. Tortura, detención, encarcelamiento sin cargos, tribunales militares, asesinato extrajudicial: este fue el destino de muchos militantes del M-19 y de otros militantes revolucionarios, la mayoría jóvenes procedentes de la clase media urbana¹⁷.

En este contexto político se formó Gustavo Petro. Nacido en 1960, es hijo de un maestro del departamento caribeño de Córdoba, que se mudó a la capital para estudiar ingeniería civil. Creció en Zipaquirá, una pequeña población situada a media hora de Bogotá, que ahora forma parte del gran distrito metropolitano. Editó el periódico de su colegio y se unió al ala política del M-19 en 1977 a los 17 años. A comienzos de la década de 1980, fue elegido concejal del municipio de Zipaquirá; en 1984 anunció su militancia en el M-19 en la plaza del pueblo. La política era su vocación, aunque

¹⁶ Alfredo Molano, *Aguas arriba. Entre la coca y el oro*, Bogotá, 1990; Alfredo Molano, *A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc*, Bogotá, 2016.

¹⁷ A. Ricardo López Pedreros, *Makers of Democracy: A Transnational History of the Middle Classes in Colombia*, Durham (NC), 2019.

la economía se convertiría en su campo de estudio; cursó la licenciatura y un máster en dos de las principales universidades privadas del país, el Externado y la Javeriana. Detenido por el ejército por posesión de armas en 1985, semanas antes de la toma del Palacio de Justicia, fue torturado y condenado a dos años de cárcel. Cuando lo liberaron en 1987, la protesta social estaba creciendo de nuevo. Con dos camaradas del M-19, Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolff, negoció el derecho a presentarse a las elecciones, como estaban haciendo las FARC (a través de la UP) y el ELN. Fue elegido senador para la Asamblea Constituyente de 1991, aunque el año anterior Pizarro había sido asesinado por los paramilitares, al igual que el candidato presidencial de las FARC.

Las elecciones de 1991 a la Asamblea Nacional Constituyente demostraron que existía un claro interés por las alternativas políticas. Si bien el Partido Liberal, con 25 escaños, dominaba la Asamblea, el Movimiento Alianza Democrática M-19 –que incluía a antiguos guerrilleros, en buena parte del M-19– era el segundo bloque de mayor tamaño, contando con 19 escaños, mientras que los conservadores se habían dividido. Esta correlación de fuerzas permitió al Movimiento Alianza Democrática M-19 influir significativamente en la redacción de la Constitución de 1991 que, como era predecible, presentó dos caras: si se hubiera logrado la aplicación de las disposiciones sobre derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y medioambientales contenidas en el Título II, Colombia se habría convertido en uno de los países más avanzados del mundo, pero en la práctica este Título fue sacrificado a las disposiciones sobre régimen económico y hacienda pública contenidas en el Título XII, lo cual reflejó el verdadero equilibrio de las fuerzas de clase existente en el país¹⁸. En la década de 1990 la situación colombiana divergió de manera aún más aguda de las estipulaciones socialdemócratas contenidas en la nueva constitución y el país se convirtió en una distopía caracterizada por tasas de homicidios disparadas y por la insurgencia rural y contrainsurgencia estatal, todo ello en medio de la introducción de políticas neoliberales despiadadas. En 1994 Petro se trasladó de Bogotá a Bruselas, donde ejerció de agregado diplomático de Colombia en materia de derechos humanos y estudió Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina. Regresó a Colombia en 1998 y logró obtener un escaño en el Congreso como candidato de una nueva formación política de la izquierda urbana, Vía Alterna. En esta fase, a finales de

¹⁸ Alisha Holland, «Insurgent Successor Parties», en Steven Levitsky *et al.* (eds.), *Challenges of Party Building in Latin America*, Cambridge, 2016, p. 302.

la década de 1990, la izquierda logró introducirse en la política electoral de Bogotá y Cali; en 2003, Luis Eduardo Garzón fue elegido alcalde de Bogotá como candidato del Polo Democrático Independiente (PDI). El gobierno de Bogotá demostraría ser el camino hacia una proyección más amplia de la nueva formación electoral.

El ascenso del uribismo

La Guerra Fría, finalizada en Europa en la década de 1990, se aceleró durante la misma en Colombia de la mano del cultivo de la coca. Nadie hizo más por intensificar el conflicto que Álvaro Uribe Vélez, a quien la socialdemocracia le parecía tan mala como el comunismo. Nacido en 1952, Uribe se crio en Laureles, un barrio de clase media de Medellín, y empezó su trayectoria política durante la década de 1970 en la Universidad de Antioquia como activista estudiantil de las Juventudes Liberales. Convertido en un abogado joven y ambicioso, pronto se dedicó a la política a tiempo completo, aunque el escándalo lo perseguía. Todo apunta a que su padre, Alberto Uribe Sierra, ejercía de intermediario en la venta de tierras para blanquear el dinero de los traficantes de cocaína, lo cual le permitió enriquecerse rápidamente a finales de la década de 1970. En 1983, cuando Uribe Sierra fue asesinado, supuestamente por las FARC, en la hacienda que la familia tenía en Córdoba, Uribe Vélez se trasladó a la finca en el helicóptero de Pablo Escobar. Virginia Vallejo, ex amante de Escobar, declaró que los dos hombres se conocían desde comienzos de la década de 1980 y que Escobar llamaba a Uribe «doctor Varito»¹⁹. Parece que se desarrolló una división funcional de trabajo entre Uribe —el político profesional y educado— y sus amigos narcos, como Escobar o los Ochoa, una familia de la elite que se convirtió en el elemento unificador del cartel de Medellín, siendo la madre de Uribe prima del patriarca, Jorge Ochoa, conocido como «el Gordo». Es imposible que Uribe se dejara engañar por las actividades de sus amigos, aunque él afirma que los conoció en su calidad de criadores de caballos y ganaderos²⁰.

Entre 1990 y 1994 la estrella del senador Uribe ascendió. Siendo gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 llevó al punto de ignición la contrainsurgencia propia de la Guerra Fría, permitiendo al mismo

¹⁹ Virginia Vallejo, *Amando a Pablo, odiando a Escobar*, Barcelona, 2017; Joseph Contreras y Miguel Garavito, *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. El señor de las sombras*, Bogotá, 2002; Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*, Bogotá, 1987.

²⁰ E. Sáenz Rovner, *Conexión Colombia*, cit.

tiempo que el negocio de la cocaína prosperase. Uribe aplicó una política de «coordinación ciudadana» con la policía y las fuerzas armadas colombianas, la cual daba a los líderes paramilitares y exportadores de cocaína espacio para maniobrar a la cabeza de las «cooperativas de vigilancia», las Convivir, creadas con licencia del Estado. El secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno Villa –considerado por la DEA el principal importador de permanganato de potasio, una sustancia química usada en la fabricación de cocaína– se coordinaba directamente con estas «cooperativas de vigilancia» y paramilitares (Moreno moriría después en un sospechoso accidente de helicóptero tras pelearse públicamente con Uribe). La incesante guerra contrainsurgente librada por los paramilitares de las ACCU junto con las Fuerzas Militares de Colombia comandadas por el general Rito Alejo del Río, el comandante preferido de Uribe, logró «pacificar» la zona exportadora de plátano del Urabá, durante mucho tiempo dominada por las FARC y el EPL. Para Uribe este fue uno de sus principales logros como gobernador. Para el ejército colombiano, al igual que para los paramilitares –ahora agrupados bajo una nueva organización paraguas nacional, las AUC– la lección estaba clara: el Urabá (y el vecino departamento de Córdoba) ofrecían el modelo de acción para frenar y revertir el avance de las FARC y/o del ELN. Las AUC se extendieron a continuación hacia las zonas principales de actividad de las FARC en la cuenca amazónica y, asentadas en zonas de control territorial cada vez mayor, empezaron a proyectar su poder a escala nacional²¹. Uribe era su figura política.

Las crisis multiestratificadas y superpuestas y las espirales de violencia que Colombia padeció a finales de la década de 1990 llevaron al límite a su sistema bipartidista. Las formas de gobierno de la vieja elite las rompió Uribe desde la derecha y lo hizo contando con apoyos muy variados, incluido en especial el gobierno de Clinton y el Congreso estadounidense, que en 1999 aprobó el Plan Colombia, un paquete antidroga dotado con 1,3 millardos de dólares destinado a luchar contra las FARC en buena medida mediante la fumigación aérea. Aunque Uribe se presentaba como un independiente contra «el sistema», entre sus partidarios figuraban los principales conglomerados y las grandes organizaciones empresariales del país, como la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC), la Asociación Nacional de Industriales, el Grupo

²¹ Álvaro Camacho Guizado, *A la sombra de la guerra. Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia*, Bogotá, 2009; Alejandro Reyes Posada, *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*, Bogotá, 2009.

Empresarial Antioqueño (GEA), el Grupo Aval, el Grupo Santo Domingo y la Organización Ardila Lülle. A Uribe lo apoyaban también asociaciones de profesionales, pequeños empresarios y comerciantes, conductores de taxis, autobuses, mototaxis y camiones, católicos devotos, jubilados, pequeños terratenientes, agroempresarios, ganaderos, oficiales del ejército y la policía, los funcionarios y una capa significativa de trabajadores, académicos e incluso estudiantes, así como los medios de comunicación dominantes (RCN y Caracol) y muchos políticos. Por supuesto, también lo apoyaban los narcoparamilitares. El jefe paramilitar de las AUC, Carlos Castaño, recogía en su autobiografía, *Mi confesión*, que la «filosofía» de Uribe –contrainsurgencia propia de la Guerra Fría combinada con catolicismo del Opus Dei y neoliberalismo radical– coincidía en gran medida con la de «la empresa»²².

Presentándose como independiente a la cabeza de la coalición Colombia Primero, Uribe fue elegido presidente en primera vuelta en mayo de 2002 con el 53 por 100 de los votos, ganando en la totalidad de los departamentos más ricos, populosos y urbanizados de la zona andina, así como en viejos baluartes de las FARC y el ELN situados en los departamentos del Amazonas, del Orinoco y del Pacífico. Asimismo, quizá un tercio del Congreso y el Senado recién elegidos tenía conexiones con las AUC. Uribe se tomó la victoria como un mandato general contra los insurgentes, que incorporaría un acuerdo con los paramilitares en términos dictados en gran medida por los propios mandos de las AUC²³. Esta vez no habría retroceso. Uribe terminaría lo que el viejo sistema bipartidista apenas había comenzado. La única forma de librar a Colombia de las FARC (y el ELN) era militarizar la sociedad.

Ni siquiera en Estados Unidos es fácil encontrar a exponentes de la doctrina de seguridad nacional anticomunista que hayan creído en ella con tanto fervor como Uribe, o que la hayan practicado con tanta devoción. En la medida en la que la guerra de Bush contra el terrorismo convirtió la contrainsurgencia en su elemento fundamental, Uribe y Bush sintonizaron muy bien y se reunieron en Cartagena de Indias y en el rancho de este último en Crawford, Texas. Bush concedería a Uribe la Medalla Presidencial a la Libertad por su colaboración en la guerra contra el terrorismo, siendo esta relación una de las claves del éxito del presidente colombiano, quien en 2008 había recibido más de 7 millardos de dólares

²² Claudia López, *Y refundaron la patria*, Bogotá, 2010.

²³ Mauricio Romero, *Rutas de la parapolítica*, Bogotá, 2007.

en ayuda estadounidense a través del Plan Colombia y su programa sucesor, el Plan Patriota, ambos diseñados explícitamente para aplastar a las FARC. Esta generosidad triplicó el presupuesto de las Fuerzas Militares de Colombia, que duplicaron su tamaño. La tecnología satelital y el equipamiento de comunicaciones de Estados Unidos permitieron al ejército interceptar las comunicaciones de las FARC y romper su cadena de mando, atacando a sus máximos dirigentes. En 2008, con ayuda de la inteligencia estadounidense, Uribe ordenó bombardear un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, matando a uno de los principales negociadores de las FARC, Raúl Reyes. Tres años después fue asesinado Alfonso Cano, alto comandante de las FARC. La marea creciente contra la insurgencia rural encontró debidamente su homólogo en las ciudades, donde se desencadenó una persecución política liderada por el gobierno; los paramilitares tenían rienda suelta para aplicar políticas de tierra quemada al hilo de la cual asesinaban y hacían desaparecer civiles. Entre 2005 y 2009, durante la presidencia de Uribe y con la connivencia de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, desaparecieron (al menos) 6.400 jóvenes de las periferias urbanas a los que los militares vestían de guerrilleros y fotografiaban con armas para aumentar el cómputo oficial de bajas insurgentes. El ejército colombiano acaba de empezar a reconocer públicamente esta historia a través de los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en sus propios términos, dejando a un lado el precio en vidas destruidas, la contrainsurgencia militarizada de Uribe fue exitosa, gracias principalmente al fuerte respaldo de Estados Unidos²⁴.

Uribe dirigió el país como si de una de sus haciendas se tratara, vociferando órdenes a sus subordinados, inspeccionando de cerca los problemas locales a través de activos «consejos comunales» y proyectando día y noche una imagen rústica, austera y patriarcal en los medios de comunicación. Intercambiar favores con aliados políticos del Congreso y con sus ministerios, muchos de ellos «paisas» de Antioquia, al tiempo que perseguía a los enemigos políticos, a menudo judicialmente, era su fuerte. Al final de su primer mandato alcanzaba una tasa de aprobación ciudadana del 70 por 100²⁵. La agresividad clientelista – sobornos a la Corte Constitucional – le permitió reformar la Constitución para poder presentarse a un segundo mandato, que ganó con facilidad

²⁴ Forrest Hylton, «Plan Colombia: The Measure of Success», *Brown Journal of World Affairs*, vol. 17, núm. 1, 2010.

²⁵ María Jimena Duzán, *Así gobierna Uribe*, Bogotá, 2004.

en 2006, obteniendo el 62 por 100 de los votos y venciendo en treinta de los treinta y dos departamentos del país. Uribe contó entonces con el respaldo de seis partidos de derecha, incluido el Partido Conservador, más el de su propia formación de reciente creación, el Partido de la Unión por la Gente (más conocido como Partido de la U).

El gobierno de Uribe aceleró la liberalización del comercio y del sector financiero, la privatización del sector público y la desregulación del mercado de trabajo. Uribe fortaleció la orientación extractivista del modelo de acumulación colombiano, favoreciendo la inversión extranjera en el sector minero y energético y subvencionando tanto monocultivos comerciales como la palma africana, el arroz, el algodón, el maíz y la caña para biocombustibles o los plátanos, como la ganadería vacuna extensiva. Las multinacionales y los bancos de inversión estadounidenses se contaron entre los principales beneficiarios, a menudo haciéndose con tierras expropiadas a la guerrilla. Uribe también tomó medidas para privatizar parcialmente la empresa estatal de petróleos, Ecopetrol, y garantizar que gobiernos futuros no pudieran revocar los contratos firmados por su gobierno con inversores extranjeros. La economía creció a una tasa próxima al 5 por 100 anual entre 2004 y 2014 y el PIB per cápita de Colombia se cuadruplicó durante el mismo periodo. Sobre el terreno, los resultados fueron desiguales: en el campo, la tasa de crecimiento fue de un anémico 1,8 por 100, frente al 7,4 por 100 registrado en el sector de la construcción, el 6,5 por 100 en el sector minero y energético y el 5 por 100 en el sector servicios. Cuando Uribe dejó el cargo en 2010, se rumoreaba que era uno de los mayores terratenientes de un país con un coeficiente de Gini rural del 0,85²⁶. Aunque había sostenido niveles elevados de popularidad al menos hasta 2008, los escándalos de corrupción crecientes y los «falsos positivos» (civiles secuestrados y asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros) empezaban a opacar su lustre. No se vislumbraba un tercer mandato.

Apretón de manos en La Habana

Aun así, el candidato elegido por Uribe, Juan Manuel Santos, barrió en las elecciones de 2010, obteniendo el 69 por 100 de los votos y valiéndose del mismo instrumento electoral, el Partido de la U, que le permitió vencer en todos los departamentos excepto en el de Putumayo. Una vez

²⁶ PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia rural: razones para la esperanza, PNUD Colombia, Bogotá, 2011.

en el poder, Santos mantuvo con astucia las políticas uribistas de lucha contrainsurgente y represión de la protesta social, sofocando el paro agrario convocado contra su tratado de libre comercio con Estados Unidos, al tiempo que rompía con su antiguo jefe y convocaba negociaciones de paz con las FARC para lo cual contaba con el respaldo del gobierno y de las empresas energéticas estadounidenses, así como de los principales conglomerados y las organizaciones empresariales de Colombia, contándose entre ellas incluso la ultrarrevanchista asociación de ganaderos, FEDEGAN, que durante mucho tiempo había prestado a Uribe un respaldo inquebrantable²⁷. Las negociaciones, que duraron cuatro años, comenzaron en La Habana en noviembre de 2012, con la colaboración crucial de Chávez y Castro, que lograron la participación de los dirigentes de las FARC. Vistas las mínimas concesiones sociales y económicas efectuadas por el gobierno, los Acuerdos de La Habana representaron una derrota histórica para el grupo guerrillero y así los vendió Santos. La débil posición negociadora de las FARC permitió a Santos excluir de las conversaciones las reformas estructurales y sellar un acuerdo de paz «barato» en beneficio de las clases propietarias.

La Habana no solo marcó el principal punto de inflexión político-militar en la prolongada guerra civil de Colombia, sino que también, como se esperaba, abrió nuevas oportunidades de inversión y acumulación de capital. La desmovilización de las FARC abriría el camino a los megaproyectos de extracción de combustibles fósiles y de minería, a los cultivos comerciales, a la cocaína, al neoparamilitarismo y al turismo en aquellas regiones antes situadas bajo el control de la guerrilla. La justificación económica de la política de paz era aumentar la inversión extranjera directa, potenciar el crecimiento económico e integrar mejor a Colombia en las cadenas de valor mundiales. Durante el primer mandato de Santos, la inversión extranjera directa aumentó más del 250 por 100. En este sentido, el proceso de paz consolidó un periodo de «acumulación primitiva» que se retrotrae a los tiempos de Uribe como gobernador de Antioquia: el desplazamiento de millones de pequeños propietarios, la confiscación de sus tierras y la reconquista territorial militar con ayuda del Plan Colombia y su sucesor, el Plan Patriota. El objetivo, como el

²⁷ Angelika Rettberg, «Need, Creed and Greed. Understanding Why Business Leaders Focus on Issues of Peace», *Business Horizons*, mayo de 2016; Nazih Richani, «Fragmented Hegemony and the Dismantling of the War System in Colombia», *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 43, núm. 4, 2020.

propio Santos indicaba, era convertir Colombia en un país «normal» para el desarrollo capitalista²⁸.

Aunque parecía que Santos había logrado un nuevo consenso a favor de la paz, entendido como una oportunidad para la nueva inversión de capital —en parte mediante el generoso reparto de «mermelada» (amiguismo público)—, Uribe se opuso estridentemente desde el Senado y presentó contra él en 2014 un candidato «de guerra» al que Santos derrotó en segunda vuelta, confirmando en apariencia el apoyo a los Acuerdos de La Habana. Pero Santos subestimó al bloque conservador creado por Uribe. Reagrupando a los partidos de extrema derecha, el expresidente montó un asalto mediático en torno a la idea de que Santos estaba dando a las FARC vía libre y las llaves del país. Sin base real, el farol tuvo éxito, sin embargo. Dado el largo historial de secuestros, violaciones de los derechos humanos y narcotráfico de las FARC, unido a décadas de cobertura mediática fuertemente sesgada en la que a menudo el ejército tenía la primera y la última palabra, muchos colombianos rechazaron la idea de que los guerrilleros se convirtieran en actores políticos. Cuando Santos sometió imprudentemente a referendo popular la cuestión el 2 de octubre de 2016 sin haber efectuado primero una campaña de educación popular en los medios de comunicación, el 50,2 por 100 de los votantes rechazó los acuerdos, lo cual no supuso, sin embargo, un golpe mortal para los Acuerdos de La Habana, ya que el Congreso ratificaría y aprobaría legalmente poco después una versión ligeramente modificada de los mismos. La derrota de Santos sí señaló, sin embargo, el peso del uribismo en el país, que logro presentar al santismo como una pendiente resbaladiza que convertiría a Colombia en Venezuela.

A pesar de las amenazas de Uribe, la transformación de las FARC en partido político, como se estipulaba en los Acuerdos de La Habana, planteó una amenaza mínima para el orden establecido. El grupo guerrillero tenía un caladero de votos limitado a regiones específicas y carecía de capacidad para extenderlo al resto del país. El acuerdo definitivo fomentaba una mayor participación democrática e incluía garantías de seguridad para los comandantes de las FARC, los sindicatos, los grupos de derechos humanos y las fuerzas disidentes, aunque no se indicaba cómo cumpliría el gobierno colombiano estas promesas y mucho menos cómo obligaría a los neoparamilitares a cumplirlas. Como las mejores partes de la Constitución de 1991, el acuerdo de 2016 fue en su mayor parte letra

²⁸ María Jimena Duzán, *Santos: paradojas de la paz y el poder*, Bogotá, 2018.

muerta. De hecho, cientos de militantes de las FARC fueron asesinados tras abandonar las armas en 2016, repitiendo la historia de la década de 1980 y dando argumentos de peso a quienes optaban por participar en los grupos disidentes de las FARC –grupos regionales residuales, implicados en el tráfico de cocaína y de armas, así como en la explotación forestal y la minería ilegales y en la extorsión– o por unirse al ELN, sumergido hasta el cuello en las mismas líneas de negocio.

Pero el proceso de paz abrió nuevas oportunidades de movilización en las ciudades para los partidos de izquierda y los movimientos sociales, a pesar de la voz relativamente escasa que se les concedió en la mesa de negociaciones (Francia Márquez fue una de las excepciones que confirmaron la regla: estuvo presente en La Habana para esbozar los derechos de las víctimas a obtener reparaciones). Los movimientos sociales urbanos exigieron la aplicación de la Constitución de 1991 y de los Acuerdos de Paz de 2016 y obtuvieron por primera vez un grado significativo de liderazgo moral e intelectual. La campaña presidencial de Petro en 2018 fue la primera señal de que se avecinaban vientos de cambio. Elegido senador en 2006 por la lista del Polo Democrático Alternativo, Petro había organizado un ataque parlamentario sostenido y muy eficaz contra el historial de Uribe, sacando a la luz los lazos de este con el paramilitarismo, el latifundismo y el narcotráfico en Antioquia durante la década de 1990, centrándose específicamente en la región de Urabá, así como la vecina Córdoba, donde este poseía latifundios. La actuación de Petro fue notable, porque sabía que le supondría amenazas de muerte creíbles y le exigiría someterse a un incremento de su seguridad, pero se mantuvo inflexible, presentando pruebas documentales crecientes para respaldar sus afirmaciones²⁹.

Aunque Duque ganó las elecciones presidenciales de 2018 con el 54 por 100 de los votos, el logro de Petro fue histórico: obtuvo 8 millones de votos equivalentes al 42 por 100 de los mismos; nunca un candidato presidencial de la izquierda había reunido semejante apoyo electoral.

²⁹ Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, *Por las sendas del Ubérrimo*, Bogotá, 2017. Junto con Petro, Cepeda, senador por el Polo Democrático, ha sido la principal figura de oposición a Uribe en el Senado colombiano, y dirige la principal organización en defensa de los derechos de las víctimas. Su padre, dirigente del PCC y congresista de la UP, fue asesinado por los paramilitares en 1994. En las elecciones de 2006 el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo fue Carlos Gaviria, distinguido profesor de Derecho Constitucional, que obtuvo un significativo 22 por 100 de los votos y ganó en dos departamentos fronterizos, la Guajira y Nariño.

Los resultados de Petro fueron buenos en Bogotá, la costa escasamente poblada del Pacífico y –en primera ronda al menos– la del Atlántico, con fuerte presencia de población afrodescendiente, junto con los departamentos de Putumayo y Vaupés, ambos con un porcentaje elevado de población indígena; estas regiones poco pobladas también votaron por Santos en 2014 y a favor de los Acuerdos de Paz en 2016. A los observadores de la política colombiana no les sorprendió que Duque obtuviera su victoria con ayuda del dinero del narcotráfico y del fraude electoral, ni que las alegaciones a este respecto, respaldadas con pruebas, no supusieran complicación alguna para su gobierno, que disfrutaba de relaciones cordiales con Washington, donde Duque había trabajado durante un largo periodo tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y donde la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, interpretaba el papel de intelectual política, a pesar de los escándalos en el sector de la construcción financiado con dinero procedente del narcotráfico en los que se vieron envueltos ella y su marido³⁰. Muchos colombianos, y por supuesto muchos estadounidenses, se habían acostumbrado en apariencia a dicha corrupción, tratándola como un desagradable ruido de fondo.

¿Uribismo redux?

Durante la presidencia de Duque el uribismo pareció volver con toda su fuerza y la contrainsurgencia y el neoliberalismo avanzaron de la mano. El gobierno boicoteó la aplicación de los Acuerdos de La Habana y rompió relaciones con Venezuela. Grandes terratenientes, ganaderos y agroempresarios estrechamente ligados a los grupos paramilitares, el narcotráfico y la delincuencia organizada conservaron sus cargos en la política regional. Los investigadores y los fiscales que trabajaban en la restitución de las tierras robadas a los campesinos desplazados por la fuerza fueron objeto de amenazas y algunos de ellos asesinados. El gobierno de Duque recortó los presupuestos a las instituciones creadas en virtud de los Acuerdos: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se avanzó poco en la cuestión del desarrollo rural o en la sustitución de los cultivos de coca. De acuerdo con la Office of National Drug Control Policy estadounidense, las plantaciones ilegales de coca crecieron durante el mandato de Duque: 245.000 hectáreas –el 12 por 100 de la tierra cultivable– estaban

³⁰ Cuando el periodista de investigación Jeremy McDermott publicó la noticia, Ramírez lo demandó por difamación y perdió. Véase Jeremy McDermott, «Tracking the Ghost. Follow the Money», *InSight Crime*, 29 de marzo de 2020.

dedicadas a la producción de hoja de coca en 2020. La persecución sistemática de activistas sociales y medioambientales, estudiantes, líderes comunitarios, organizadores sindicales, feministas, activistas LGBTQ+ y líderes de las comunidades campesinas, indígenas y negras se mantuvo al mismo ritmo. Fueron asesinados más de novecientos activistas y el número de masacres pasó de once en 2017 a noventa y seis en 2021. Las atrocidades se produjeron mayoritariamente en el Cauca, Antioquia y Nariño; los perpetradores fueron en general los paramilitares de derecha, el ejército colombiano o grupos disidentes de las FARC y los principales beneficiarios fueron terratenientes, empresas agrícolas, narcos y corporaciones mineras multinacionales. En casi todos los casos, los crímenes permanecen sin resolver³¹.

Sin embargo, a pesar de las continuidades con el uribismo algo había cambiado. Este cambio se manifestó claramente en el ciclo insólito de protesta social y lucha popular que ha sacudido las ciudades colombianas desde 2018. El prólogo de las protestas fue anterior, remontándose a junio de 2016, cuando campesinos, trabajadores rurales, grupos indígenas y movimientos sociales convocaron un paro agrario nacional, organizando marchas y bloqueando carreteras por todo el país, mientras pescadores afrocolombianos paralizaban el puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico. Lo que unía a los diferentes grupos de protesta era el rechazo del acuerdo de libre comercio firmado por Santos con Estados Unidos y de sus políticas favorables a las agroempresas y los proyectos de minería industrial, que amenazaban de manera creciente los medios de vida de unas comunidades locales que combinan la agricultura con el trabajo asalariado o la minería artesanal a pequeña escala. La movilización derivó en parte de la negativa de Santos a cumplir las promesas hechas durante el paro rural de 2013, lo cual desembocó en protestas contra el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia firmado el año anterior³².

En octubre de 2018, tras la victoria de Duque, los estudiantes colombianos convocaron un paro indefinido en las universidades públicas –el primero desde 2011– y tomaron las calles de las principales ciudades colombianas para protestar contra la desinversión pública y la profundización de la crisis estructural de la enseñanza superior. Había muchos

³¹ Casa Blanca, «ONDCP Releases Data on Coca Cultivation and Potential Cocaine Production in the Andean Region», 16 de julio de 2021; INDEPAZ, «Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022», 30 de septiembre de 2022.

³² Edwin Cruz, «La recomposición del movimiento campesino en Colombia, 2013-2016», *Revista Via Iuris*, 26, enero de 2019.

más estudiantes universitarios que antes, pero se hallaban en condiciones precarias y con perspectivas limitadas de mejora de su futuro profesional. Aunque Duque –y en especial el ubicuo Uribe– intentaron tacharlos de vándalos y delincuentes peligrosos, los estudiantes ganaron de hecho el debate acerca de la importancia de financiar la educación pública y de respetar el derecho de huelga y recibieron el respaldo de los centros y las periferias de las ciudades, donde la mayoría de la población no va a la universidad o incluso no termina siquiera la educación secundaria. Al final, los estudiantes le sacaron al gobierno de Duque 1.400 millones de dólares adicionales³³.

Al año siguiente el ministro de Hacienda de Duque, Alberto Carrasquilla –otro reciclado de Uribe, presente en los Papeles de Panamá, compinche de Duque en los círculos de las instituciones financieras institucionales con sede en Washington y notorio por los instrumentos de deuda estructurados (los «bonos de Carrasquilla») con los que empresas financieras en las que él tenía mano atraparon a más de cien municipios pobres con tasas de interés de dos dígitos– introdujo una nueva tanda de reformas neoliberales. La propuesta de Carrasquilla, una nueva ofensiva de la redistribución hacia arriba de la renta y la riqueza, pretendía reducir el salario mínimo, introducir los contratos por horas y el salario diferencial, traspasar el fondo público de pensiones a entidades privadas, privatizar la empresa petrolera estatal, las emisoras de radio y la totalidad de las empresas en las que el Estado conserva todavía menos de la mitad de las acciones, y rebajar los impuestos a las multinacionales y subirlos a los ciudadanos de clase media y trabajadora. A finales de noviembre de 2019, los sindicatos y los movimientos estudiantiles convocaron un paro nacional. En términos de personas movilizadas en las calles, del grado de paralización de las ciudades durante meses sin solución de continuidad y del dominio del ciclo informativo y del discurso público, los estudiantes desplegarían una capacidad inigualable en los meses siguientes. La huelga general de 2019 fue mucho más allá del movimiento estudiantil, sin embargo, y se calcula que un millón y medio de personas tomaron las calles tanto en las grandes ciudades como en poblaciones menores de todos los departamentos: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Pasto, Popayán, Villavicencio, y otros quinientos cincuenta municipios más³⁴.

³³ Sandra Borda, *Parar para avanzar*, Bogotá, 2021.

³⁴ Los párrafos siguientes se basan en las noticias que nosotros enviamos sobre las protestas a medida que se iban sucediendo. Véanse, entre otros, Forrest Hylton, «In Medellín», *London Review of Books* Blog, 26 de noviembre de 2019; Aaron Tauss y

Estudiantes, sindicatos, docentes, movimientos por la paz y ecologistas, colectivos feministas, camioneros, comunidades indígenas y afrocolombianas, jubilados, organizaciones por los derechos LGTBI+ y campesinas, profesionales de clase media y algunos pequeños y medianos empresarios protestaron y se sumaron día tras día al paro contra la corrupción gubernamental, la violencia policial, la desigualdad social, el aumento del precio de la electricidad, los proyectos extractivistas a gran escala y los asesinatos sistemáticos de activistas. En concreto, la generación más joven –no solo de estudiantes, sino también de trabajadores precarios y desempleados–, que no había experimentado la represión de las décadas de 1980 y 1990, llevó el mayor peso en las movilizaciones, que sacudieron el país durante semanas. Más que nunca, las redes sociales desempeñaron una función esencial en las acciones colectivas, así como para superar la dispersión geográfica de las protestas. Siguiendo los ejemplos internacionales, extendiéndose desde Bogotá al resto del país, los manifestantes situados en primera línea –principalmente, pero no solo, estudiantes y jóvenes; principalmente, pero no solo, varones– usaban cascos, prendas y escudos protectores, en buena parte de fabricación casera. A diferencia de las bandas de barrio, no tenían armas, pero, no obstante, se incorporaban igualmente a la primera línea para enfrentarse a los antidisturbios noche tras noche, mientras que en Bogotá desafiaban los toques de queda impuestos por la alcaldesa del Partido Verde, de corte liberal, Claudia López, que salió de las protestas profundamente desacreditada, al igual que el eterno candidato presidencial de su partido, Sergio Fajardo.

Las manifestaciones, las barricadas, los paros de los trabajadores y trabajadoras y los bloqueos de carreteras expresaban la oposición al neoliberalismo clasista de Carrasquilla y, al mismo tiempo, señalaban el debilitamiento ideológico del uribismo, que no logró que el tribunal de la opinión pública declarase semiinsurgentes coaligados con Venezuela y el ELN a los manifestantes. El rechazo al gobierno represor de Duque y al uribismo como ideología dominante del país tuvo un efecto unificador. Ayudó a superar la heterogeneidad de los sujetos políticos y su

Joshua Large, «In Latin America, the Long Shadow of Colombia's Far Right Is Receding», *Jacobin*, 12 de diciembre de 2021; Aaron Tauss, «Colombia Is in Revolt against Neoliberalism», *Jacobin*, 20 de mayo de 2021; Forrest Hylton, «Colombia Rising», *London Review of Books Blog*, 7 de mayo de 2021, y «La Resistencia», *London Review of Books Blog*, 31 de mayo de 2021. Véase también Raúl Zibechi et al., *Colombia, entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la movilización social* 28 abril de 2021, Medellín, 2021.

fragmentación geográfica y sectorial y fortaleció el compromiso compartido de luchar por una Colombia socialmente justa, democrática y desmilitarizada. Las semanas de protestas hicieron virar el sentido común del país hacia la izquierda y fortalecieron la idea de que la acción directa y no violenta podía lograr que se escuchasen las demandas planteadas. Al mismo tiempo, los movimientos lucharon por elaborar una agenda de negociaciones coherente, mientras las tensiones entre los sindicalistas veteranos y la juventud estudiantil, así como entre los representantes oficiales de los estudiantes y los activistas de base, fermentaban en el Comité Nacional de Paro, que no lograba abarcar la amplitud de los movimientos ni, lo cual es más importante, de las regiones implicadas, ya que movimientos diferentes se unían en las calles de las capitales departamentales y de ciudades específicas, cada uno expresando sus propias dinámicas específicas.

La pérdida de hegemonía del uribismo se puso también de manifiesto en las elecciones regionales celebradas en octubre de 2019. En las tres ciudades principales del país (Bogotá, Medellín y Cali) se hicieron con la mayoría candidaturas independientes. Además de las dificultades socioeconómicas que afectan a la vida de muchos colombianos y de la baja popularidad de Duque como presidente —que tenía una aceptación de menos del 20 por 100 en diciembre de 2019— el apoyo menguante al uribismo estaba relacionado con el propio Uribe, el político en este momento más impopular del país. Con más de doscientos procedimientos judiciales abiertos contra él —entre otras razones por soborno y compra de testigos, cargos por los que está siendo juzgado— en los tribunales nacionales e internacionales, la capacidad del expresidente para proporcionar un liderazgo ideológico o político a las clases dominantes, medias y subalternas había desaparecido, y ello incluso en Antioquia y, más al sur, en el eje cafetero. Los paros y las manifestaciones masivos contra el gobierno y la incapacidad de Duque para responder de otra forma que no fuese con la violencia, a menudo mortal, aceleraron la decadencia de Uribe, puesto que las protestas iban dirigidas contra él en igual medida que contra el presidente. Sin embargo, con las navidades y el año nuevo a la vista, Duque no tenía más que esperar las vacaciones para disfrutar de un respiro.

Estaba previsto que las protestas se reanudasen en marzo de 2020, junto con las negociaciones del gobierno con el Comité Nacional de Paro, pero la pandemia de la COVID-19 detuvo este proceso. El virus golpeó con dureza

el país, que sufrió elevadas tasas de infección y un colapso de las unidades de cuidados intensivos; hasta la fecha han fallecido más de 140.000 personas. La pandemia empeoró rápidamente una situación social ya de por sí terrible, provocando un fuerte aumento del desempleo, la pobreza y el hambre. Más del 40 por 100 de la población cayó por debajo del umbral de pobreza, mientras el 15 por 100 ya vivía en situaciones de pobreza extrema (con seguridad ambos cálculos infravaloran la situación). Casi dos tercios de la población trabajadora recibían el salario mínimo, menos de 250 dólares al mes. La devaluación del peso encareció más los alimentos importados, golpeando con mayor fuerza a la clase trabajadora pobre. También amplió la brecha entre estos y la clase dominante, cuya riqueza aumentó. La incapacidad del gobierno para gestionar la crisis encendió las llamas de la ira y el descontento populares y distanció a buena parte de la burguesía. Pequeñas y medianas empresas echaron el cierre y no volvieron a abrir. El desempleo alcanzó el 16 por 100.

El estallido popular

En abril de 2021 Carrasquilla presentó una nueva reforma tributaria regresiva en la que proponía aplicar un IVA del 19 por 100 a alimentos básicos como los cereales, la leche, el azúcar y el café, así como a los servicios básicos (agua, electricidad, gas), al tiempo que preveía también subvenciones para los ricos. Como respuesta a ello, estudiantes, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones campesinas convocaron otro paro nacional y en los días que siguieron las protestas aumentaron en alcance e intensidad, convirtiéndose en el mayor estallido popular registrado en la historia de Colombia. Como el propio país, la revuelta de 2021 fue predominantemente urbana, aunque también se movilizaron las zonas rurales en la que se produjeron bloqueos de carreteras. Más del 10 por 100 de la población tomó las calles de todo el país, exigiendo la dimisión de Carrasquilla y la abolición del IVA, que Duque tuvo que conceder de inmediato. Pero el movimiento pasó a exigir también reformas sociales, económicas y políticas fundamentales, junto con la dimisión del ministro de Defensa y del propio Duque. Muchos dijeron que, tras la pandemia y el asesinato policial de jóvenes, no tenían nada que perder, ni siquiera el miedo.

El «estallido social», que duró desde finales de abril hasta junio de 2021, marcó la continuación, la expansión y la radicalización del paro general declarado en noviembre-diciembre de 2019. La pandemia profundizó aún más la crisis y puso de manifiesto la falta de consenso —en

buena medida entre la fragmentada burguesía del país, que rechazaba el gobierno de Duque por más de dos tercios— en torno a cómo debería organizarse el Estado y la sociedad colombianos. Esta fragmentación entre las diversas facciones de las clases dominantes reflejaba la descomposición del bloque histórico que Uribe había dirigido y abría un espacio en el que expresar las exigencias populares. Al mismo tiempo, la propia fragilidad del consenso del área de gobierno hizo que en la respuesta del Estado predominara una coerción apabullante. En los dos meses de movilizaciones, la represión gubernamental dejó cuarenta y cuatro fallecidos, cuarenta y siete personas con lesiones oculares graves y más de cuatro mil seiscientos heridos y se produjeron dos mil detenciones arbitrarias³⁵. La población temía a los coches sin matrícula conducidos por hombres vestidos de paisano y a los policías en moto, pero solo se quedaba en casa por la noche. Incluso miembros de los equipos de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, que documentaban la dureza policial, fueron víctimas de la violencia estatal en el propio acto de registrarla. Muchas de las víctimas ni siquiera eran manifestantes, algo que no hizo sino atizar la protesta y la revuelta.

Al igual que los estudiantes de medicina y los médicos que atendían a los heridos, los periodistas fueron objeto del ataque policial. El apagón informativo sobre la violencia fue prácticamente total en los medios de comunicación convencionales, pero las imágenes de la mortal brutalidad policial, actualizadas cada mañana, circularon a escala nacional e internacional por las redes sociales. El campo de Uribe tachó a los manifestantes de «vándalos» y «terroristas», o, combinando ambas palabras, de «vándalos terroristas». En Twitter, el propio Uribe exigía que se sacara el ejército a las calles y se declarase el estado de excepción. Cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez viajó a Washington para efectuar la evaluación de daños y le preguntaron por los desaparecidos y los muertos, respondió que no había. En su mayor parte, los medios de comunicación convencionales de Colombia, emulando a Duque y a los empresarios y políticos de derecha, intentaron achacar el levantamiento a Venezuela, al castro-chavismo y a su representante en Colombia, describiendo a Petro como un inveterado maestro de la conspiración.

De hecho, Petro y su partido, Colombia Humana, desempeñaron un papel secundario, por no decir insignificante en las movilizaciones.

³⁵ «Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública de Colombia», *Temblores*, 28 de junio de 2021.

Pocos siguieron el ejemplo de María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro y congresista por Colombia Humana, que se reunió con los organizadores locales en las calles; y pocos habrían sido bien recibidos, de todos modos en ellas. Por razones tácticas y estratégicas, Petro pidió a los manifestantes que desmontaran las barricadas, pero, como él mismo señaló, no le escucharon. Surgieron más, por el contrario, y siguieron apareciendo nuevos frentes: madres en primera línea, profesores universitarios en primera línea; estudiantes de medicina en primera línea; maestros en primera línea; etcétera. De hecho, la elite cultural urbana de Colombia apoyó en general las movilizaciones, a diferencia de su desinterés por las luchas rurales. En mayo y junio de 2021, la masiva movilización democrática de jóvenes en las ciudades atrajo a músicos, artistas, escritores, actores, cineastas, productores y profesionales de toda índole. Este movimiento de movimientos, que dominaba las redes sociales y otros medios de comunicación, tenía suficiente autoridad moral como para suscitar enfrentamientos por el control de la representación y el liderazgo, y muchos activistas de base afirmaron que estaban surgiendo de la nada oportunistas en busca de ventajas electorales y políticas.

A diferencia del paro general de 2019, sin embargo, lo que surgió en 2021 fue un estrato de liderazgo social ejercido por los llamados ninis: jóvenes sin trabajo estable, ni estudios y carentes de perspectivas de futuro de acceder a ambos, que viven en circunstancias precarias en el equivalente colombiano de las favelas, los llamados simplemente «barrios populares». Los «nadies», como también se les llamaba, no estaban mínimamente familiarizados con las instituciones del Estado o de la sociedad civil, ni confiaban en ellas, lo cual hacía que las negociaciones resultaran improbables. ¿Quién estaría dispuesto a hablar con ellos en las barricadas, después de todo, sin enviar por delante a la policía? Desde luego ni el alcalde de Cali ni el gobernador del Valle del Cauca. Los «muchachos» y «muchachas» se unieron a residentes de barrios como Siloé, situado en los cerros occidentales de Cali y con una rica tradición de radicalismo obrero y sindicalismo, para desarrollar trabajo colectivo —la *minga*, una palabra quechua tomada del movimiento indígena del Cauca: el término en sí refleja la circulación de las luchas en el sudoeste— para proporcionar comida y seguridad durante el paro. Cerca de las barricadas, se instalaron cocinas comunitarias, organizadas por mujeres que pertenecían a las familias de la comunidad y sostenidas por pequeños donativos, en las que los jóvenes comían mejor de lo que podrían hacerlo en su casa debido a la pobreza, inducida en parte por la pandemia.

Las cocinas comunitarias servían también de lugares de debate y pedagogía políticos, donde los veteranos podían hablar con los jóvenes, principalmente acerca de la historia vecinal. Dinámicas similares se dieron en los distritos afrocolombianos densamente poblados del este. En Cali –epicentro, como se ha señalado, de las movilizaciones de 2021– diferentes barrios y grupos se reunieron para formar los Colectivos Unidos. Procesos similares se produjeron en puntos fundamentales de la periferia bogotana: Soacha, en el oeste, y Ciudad Kennedy al sur de la ciudad, por ejemplo. Además, o en lugar, de manifestarse por el centro de las ciudades, la gente organizaba asambleas locales para decidir colectivamente cómo cubrir las necesidades básicas en las comunidades en las que residían.

Las imágenes de deliberación colectiva en los cabildos vecinales de las ciudades –un proceso meramente incipiente en 2019, pero que en 2021 se había extendido incluso a distritos de clase media, en especial en el sudoeste del país, donde los ciudadanos solicitaron la formación de un cabildo abierto regional– no circularon ampliamente en las redes sociales o en otros medios de comunicación, lo cual impidió comprender en qué medida emergía un nuevo tipo de soberanía y solidaridad populares en las barricadas, en los barrios y en las marchas y manifestaciones, y con él un nuevo tipo de sujeto histórico: la juventud marginada de la periferia urbana. Esta intensificación de la lucha social y de la resistencia popular en las calles entre 2018 y 2021 y en el campo entre 2016 y 2021 hizo posible la victoria de Petro, mientras que los Acuerdos de La Habana firmados en 2016 fueron la condición que posibilitó este nuevo ciclo de lucha basado en la acción directa de masas. En este sentido, tras la firma de estos, la figura reprimida de una izquierda urbana democrática, dotada de su propio programa de cambio social, que había desaparecido debido a la guerra sucia iniciada en 1977, volvió para derribar el prolongado dominio del Estado contrainsurgente de Colombia³⁶.

Si efectuamos una comparación entre las reivindicaciones que cristalizaron en 2021 y el programa con el que Petro se presentó a las elecciones presidenciales en 2022, constatamos que se superponen de manera considerable. Las reivindicaciones abarcaban diecisiete puntos o áreas: los acuerdos de paz; la erradicación de la corrupción gubernamental; la

³⁶ Charles Bergquist, «La izquierda colombiana: un pasado paradójico, ¿un futuro promisorio?», *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 44, núm. 2, 2017.

eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); la gratuidad de la enseñanza superior y la cancelación de la deuda estudiantil; el derecho a la protesta pacífica; una reforma tributaria progresiva; la reforma sanitaria, para convertir el modelo totalmente privatizado, al estilo estadounidense, en algo más parecido al brasileño; la igualdad de género; la reforma de las pensiones; la regulación de la explotación maderera; la minería y las corporaciones energéticas; la devolución de las tierras robadas por las FARC y los paramilitares; y la reorganización de la policía y del ejército. No hace falta decir que Duque se negó a negociar con los manifestantes. Claramente su idea era esperar a que se aplacaran los ánimos por sí mismos, como hicieron los anteriores gobiernos de Santos con los paros agrarios de 2013 y 2016 y como Duque había intentado hacer con la huelga estudiantil de 2018. La historia de los conflictos obreros enseña que, durante las huelgas y los disturbios, el tiempo tiende a estar del lado del Estado y del capital, no de la clase obrera y sus aliados.

El empuje electoral

Finalmente las elecciones parlamentarias celebradas el 13 de marzo de 2022 registraron los cambios que habían tenido lugar. Petro encabezó una nueva alianza progresista, el Pacto Histórico, compuesto por veinte partidos y movimientos de menor tamaño³⁷. Al hacerse con el 17 por 100 de los votos populares, el Pacto Histórico se convirtió en el mayor bloque político, obteniendo el 20 (de 108) escaños en el Senado y el 28 (de 166) en la Cámara de Representantes. Los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, quedaron segundo y tercero, con porcentajes del 14 y el 12 por 100 respectivamente, mientras que el Centro Democrático de Uribe y el Partido de la U de Santos apenas alcanzaron el 10 por 100 cada uno, aproximadamente lo mismo que el Partido Verde. Fue en especial un duro golpe para el Centro Democrático, que pasó de ser la primera fuerza en el Congreso a convertirse en un partido minoritario, con 13 escaños en el Senado y 16 en la Cámara.

³⁷ El Pacto Histórico integra a Colombia Humana de Petro, organización sucesora del Polo Democrático Alternativo, a los Comunes de las FARC, al Partido Comunista de Colombia, a Todos Somos Colombia, una formación de centro izquierda al estilo del Morena mexicano, así como a otras agrupaciones de izquierda o socialdemócratas, partidos indígenas, movimientos sociales, activistas afrocolombianos, la Unión Patriótica y el Congreso del Pueblo –un movimiento social de gran importancia en las movilizaciones populares de 2013– y a algunos parlamentarios oportunistas antes integrados en las filas de Santos o de Duque.

En las primarias, celebradas el mismo día que las elecciones legislativas, el Pacto Histórico nombró candidata a la vicepresidencia a Francia Márquez, la primera mujer negra candidata a ese cargo en la historia del país. Habiéndose presentado primero a las primarias presidenciales como candidata independiente de izquierda, quedó segunda después de Petro, obteniendo 783.160 votos. Hija de mineros artesanales de La Toma, un pueblecito del municipio de Suárez situado en las montañas sudoccidentales del departamento del Cauca, Márquez, nacida en 1981, luchó de adolescente para defender el río Ovejas como recurso para su comunidad e hizo campaña para bloquear la explotación de la región por multinacionales mineras como la sudafricana AngloGold Ashanti Limited durante los gobiernos de Uribe y Santos, a pesar de los ataques intimidatorios lanzados por grupos paramilitares. En 2014 encabezó una marcha de 600 kilómetros de mujeres negras del Cauca hasta el palacio presidencial en Bogotá, exigiendo que se pusiera fin a la minería ilegal en sus territorios. Participó como representante de las víctimas en el proceso de paz de La Habana, logrando que les reservaran escaños en el Congreso. Márquez proviene, por lo tanto, de los movimientos afrocolombianos por el derecho al título colectivo de la tierra y del movimiento feminista y de las organizaciones indígenas y ecologistas, así como de la principal universidad pública (Universidad del Valle, o Univalle) del sudoeste del país, desde hace mucho tiempo la región más radicalmente democrática del mismo.

Como era previsible, operadores políticos de diferentes partidos derechistas lanzaron antes de las elecciones presidenciales una campaña de desinformación racista y misógina, basada en lemas concisos y vídeos y tuits manipulados. Los medios de comunicación convencionales resaltaron el pasado militante de Petro y el gobierno saliente de Duque acusó al Pacto Histórico de ser aliado de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pese a que Petro se distanció hace mucho retóricamente de estos tres países, algo que no sorprenderá de un exguerrillero candidato a presidente de Colombia. No obstante, Petro y Márquez ganaron con facilidad la primera vuelta, celebrada a finales de mayo, obteniendo algo más del 40 por 100 de los votos. Para sorpresa de todos, el candidato que quedó en segundo lugar no fue el elegido de Uribe, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, de la coalición derechista Equipo por Colombia, sino Rodolfo Hernández, candidato independiente de 77 años, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo el 28 por 100 de los votos. Al igual que Trump, Bolsonaro o el propio Uribe, el antiguo alcalde de

Bucaramanga siguió una estrategia derechista, populista y autoritaria contra el *establishment*, presentándose como agente político independiente y franco. Apoyándose en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook, planteó un discurso agresivamente simplista y políticamente incorrecto contra la corrupción y la política tradicional.

Para la segunda vuelta, Hernández recibió el respaldo de grandes secciones de la derecha tradicional colombiana y del bando uribista, que no habían logrado imponer a su propio candidato. Los medios de comunicación oligárquicos del país desempeñaron una vez más una función crucial. *Semana*, el semanario más importante de Colombia, se pronunció firmemente a favor de Hernández y situó el fantasma del castrochavismo en el centro ideológico de la campaña. La advertencia apocalíptica de que Petro convertiría el país en «otra Venezuela» se aprovechaba del miedo xenófobo a los dos millones de venezolanos que han huido a Colombia en años recientes (algunos de ellos descendientes de emigrantes colombianos). Pero no todos los uribistas se pusieron de parte de Hernández y así el Partido Verde, una pequeña formación centrista, recomendó votar a Petro en vez de a su oponente. El tándem Petro-Márquez ganó la segunda vuelta con el 50,4 por ciento de los votos frente al 47,3 por 100 obtenido por Hernández. Petro lograba así el mayor número de votos jamás obtenido por un candidato presidencial. Su campaña movilizó, asombrosamente, un 4 por 100 más de votos, 2,7 millones, en segunda vuelta, procedentes principalmente de jóvenes que votaban por primera vez y de colombianos y colombianas pobres de las periferias urbanas, quienes con anterioridad se habían mantenido al margen de las urnas. La participación electoral fue la más alta registrada desde 1998, cuando Andrés Pastrana ganó gracias a su promesa de firmar la paz (y con el apoyo tácito de las FARC).

Las visitas de Petro a las regiones más abandonadas y sacudidas por la guerra de Colombia y sus discursos, largos y pedagógicos, ayudaron a crear una percepción alternativa en cuestiones políticas, éticas e incluso estéticas: la música y la danza regionales formaron parte destacada de los mítines de campaña. Petro y Márquez ganaron también en las grandes ciudades, a excepción de Medellín, aunque incluso allí obtuvieron un tercio de los votos, y aumentaron el número de votantes en más de 200.000, recibiendo un respaldo abrumador en las áreas rurales del país. Petro ganó con facilidad tanto en la costa atlántica como en la del Pacífico, y en el sudoeste densamente poblado. En el ámbito municipal, los resultados

mostraron una fuerte correlación entre el porcentaje de votos obtenido por Petro y el porcentaje de personas que viven en la pobreza. Las regiones de las costas del Caribe y del Pacífico, como el Chocó, el Cauca, Nariño, Putumayo y La Guajira, con mayoría de población negra e indígena y especialmente afectadas por el conflicto armado y la desigualdad, votaron con entusiasmo por Petro y Márquez. En el Chocó, con su enorme mayoría afrocolombiana, votó por Petro el 81,4 por 100 de los electores; sin embargo, el Chocó tiene una población diminuta en comparación con el Valle, Bogotá o Antioquia. Tener a Márquez de candidata a la vicepresidencia ayudó a motivar a los habitantes de las áreas rurales del país descuidadas históricamente por el poder central. Su ejemplo de vivir sin miedo a las amenazas de muerte y su idea de «vivir sabroso» —una variante afrocolombiana de las perspectivas indígenas andinas del «buen vivir» o «vivir bien», codificadas en las constituciones ecuatoriana y boliviana de 2008 y 2009— atraía a quienes deseaban un futuro menos distópico, que pudieran considerar suyo.

El avance histórico representado por la victoria de Petro y Márquez el 19 de junio de 2022 difícilmente necesita subrayarse. Tras doscientos años de sucesivos regímenes excluyentes, las clases populares tienen al fin sus propios tribunales ejerciendo el poder. Como hemos explicado, la derrota electoral del viejo duopolio liberal-conservador por parte de Uribe —con el respaldo de las facciones dominantes del capital colombiano transnacionalizado: el sector financiero, el inmobiliario, el comercio, la agricultura comercial, la minería, el petróleo, el gas y la cocaína— y su aplastamiento brutal de las insurgencias rurales abrieron paradójicamente el camino al ascenso del Pacto Histórico, después de que Santos lograra al menos una paz parcial con los Acuerdos de La Habana. Está por ver, sin embargo, en qué medida este logro trascendental representará también una ruptura política y económica a favor de los desposeídos.

En el discurso pronunciado la noche electoral, Petro anunció que su gobierno va «a desarrollar el capitalismo. No porque lo veneremos, sino porque primero tenemos que superar la premodernidad, el feudalismo, los nuevos esclavismos, superar mentalidades atávicas». La teoría de las fases históricas contenida en la frase era común en la izquierda latinoamericana del siglo xx y fue revitalizada más recientemente por Álvaro García Linera en Bolivia; aunque, por supuesto, al igual que Bolivia, Colombia ha sido en los últimos ciento cincuenta años un país cada vez más capitalista. Como decíamos, el programa de Petro no es radical, ni mucho

menos revolucionario. No hay expropiaciones sobre la mesa. Ha prometido, sin embargo, poner en marcha una agenda moderada de reformas con el objetivo de revitalizar y renovar los flujos de inversión y, al mismo tiempo, romper con la teoría y las prácticas neoliberales y tener en cuenta los movimientos relacionados con la diversidad étnica, el medio ambiente, el género y la sexualidad, así como con el empoderamiento de las mujeres. Por primera vez, destacan las feministas de izquierda en el Congreso y en algunos Ministerios. ¿Acompañará la redistribución a la representación o, de no producirse la primera, bastará con esta última? El objetivo es construir los cimientos progresistas de la Constitución de 1991, reducir la desigualdad social, redistribuir cautamente la riqueza a través de un sistema tributario progresivo, garantizar los derechos civiles fundamentales y avanzar en pro de la democratización del Estado y la economía. En lugar de construir el socialismo del siglo XXI *à la* Chávez, Petro aspira, al menos retóricamente, a conseguir un capitalismo más regulado. Aunque suene utópico, es en parte una señal de cuánto ha cambiado la política en Colombia y en nuestro propio tiempo.

Petro es socialdemócrata y la interpretación que hace de la historia colombiana pone de relieve los costes que su pueblo tendría que soportar de no implementarse una paz general y una justicia social alcanzadas mediante políticas de reformas redistributivas. Ha dicho que pretende poner en marcha las reformas modernizadoras constantemente postpuestas por la oligarquía desde la década de 1930, pasando por La Violencia de las décadas de 1940 y 1950, hasta el Frente Nacional de las décadas de 1960 y 1970 —la reforma agraria, por ejemplo— antes de que el neoliberalismo tomara las riendas durante las décadas de 1980 y 1990. A pesar de su pasado guerrillero, o quizá debido al nacionalismo bolivariano del M-19, Petro se considera en línea con dirigentes liberales como Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, todos los cuales, pese a haber sido oligarcas, apoyaron la reforma agraria y otras reformas sociales. Pero Petro pretende también reformar el nexo capital-Estado, tanto nacional como internacional, para invertir en desarrollo (verde) y en la paz, y al mismo tiempo dismantelar el Estado contrainsurgente. ¿Podrá establecer un consenso de gobierno para alcanzarlo?

Petro presidente

Los principales nombramientos ministeriales efectuados hasta la fecha ofrecen una imagen variopinta. Por un lado, el ministro de Hacienda,

José Antonio Ocampo Gaviria, nacido en Cali en 1952, pertenece desde hace tiempo a la elite gobernante colombiana educada en Estados Unidos: doctor en ciencias económicas por la Universidad de Yale (1976), ha desempeñado cargos ministeriales bajo las presidencias de Gaviria y Samper en las se implementaron drásticas políticas neoliberales durante la década de 1990 y ha sido profesor en la Universidad de Columbia, donde ha coeditado numerosos volúmenes sobre desarrollo económico con Joseph Stiglitz, habiendo utilizado las puertas giratorias para acceder a diversos *think tanks* internacionales y a cargos bien remunerados en Naciones Unidas. Por el contrario, los nuevos ministros de Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores, aunque de procedencias ideológicas distintas, han estado todos ellos ligados de una u otra manera con el proceso de paz. El ministro del Interior, Alfonso Prada, nacido en Bogotá en 1963, operador político con antecedentes en el Partido Liberal, después en el Verde, fue promovido por Santos, trabajó con firmeza para popularizar los Acuerdos de La Habana y viró hacia la campaña de Petro en abril de 2022. El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, nacido en Medellín en 1955, es abogado de formación y desempeñó una función primordial en las acusaciones contra la parapolítica, investigando las ejecuciones extrajudiciales y los abusos de los derechos humanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvaro Leyva, nacido en Bogotá en 1942, anteriormente militante del Partido Conservador, desempeñó una función vital como mediador de paz con las FARC durante la presidencia de Betancur en la década de 1980. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, nacido en Bogotá, es profesor de Derecho en el Externado y ha recibido el encargo de renovar el sistema de justicia colombiano.

Por el momento, los grupos de izquierda y los movimientos sociales del Pacto Histórico solo han obtenido cuatro de los dieciocho ministerios: Trabajo, Medio Ambiente, Salud y Minas y Energía. En lugar de imponer su (estrecha) ventaja, Petro ha establecido alianzas con las fuerzas políticas convencionales para blindarse contra la desestabilización. A la vicepresidenta Márquez se le ha prometido un nuevo Ministerio de Igualdad para eliminar las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres, así como entre los diferentes grupos étnicos y la sociedad criolla-mestiza dominante. En teoría, a las mujeres se les concederá acceso especial al empleo, la vivienda, la tierra, la atención sanitaria y la educación, como estipula la Constitución de 1991; las que han dedicado su vida a los cuidados domésticos serán integradas en el sistema público de pensiones. El ministro del Interior, Prada, todavía

no ha presentado, sin embargo, el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y ha nombrado, con la oposición de las feministas, a Cielo Rusinque directora del Departamento de Prosperidad Social, contrariando así a Márquez. Aunque corren rumores de que se han abierto fisuras entre ellos, Petro ha firmado el Decreto 1874 sobre equidad, que otorga funciones a Márquez, aunque sin asignarle presupuesto. Márquez ha recibido también el encargo de crear una Comisión Intersectorial de Reparación Histórica para «superar los efectos del racismo»; pero, de nuevo, sin concederle más presupuesto adicional.

A partir de este comienzo desigual podemos empezar a esbozar los retos pendientes, tanto para un acuerdo civil como en el frente económico, y a definir, pues, cuáles son los posibles aliados populares que Petro podría movilizar contra la oposición oligárquica y de las multinacionales. Como ha sido evidente desde la década de 1980, el conflicto armado de Colombia solo puede resolverse mediante acuerdos con los actores implicados, incluidos los grupos neoparamilitares. Por eso Petro se reunió con Uribe para conversar sobre la paz con el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mayor grupo neoparamilitar. A diferencia de su predecesor, Petro ha prometido implementar reformas rurales para sustituir los cultivos de coca. Su gobierno pretende alcanzar lo que Santos denominó en algún momento la «paz total» frente a los múltiples acuerdos establecidos hasta el momento. El diablo está, sin embargo, en los detalles, no solo en lo referido a los disidentes de las FARC y a la guerrilla del ELN, sino sobre todo en lo que atañe a las AGC, el verso suelto de este asunto. Como los grupos mexicanos con los que colaboran, las AGC son un conglomerado multinacional con base en Urabá, la zona cero del paramilitarismo contemporáneo. El gobierno pretende poner fin a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, lo que le permitirá ofrecerles incentivos para que confiesen sus delitos y abandonen su actividad; casi trescientos narcos importantes han señalado su voluntad de hacerlo. Queda por ver si las AGC necesitarán una legislación especial y si Estados Unidos —la DEA en especial, pero también la CIA, y los Departamentos de Estado y Defensa— apoyará esas negociaciones o las saboteará. En la actualidad el senador Iván Cepeda está redactando una propuesta de ley que permita la participación de las AGC, junto con el ELN y los disidentes de las FARC, hasta la fecha excluidos de la mesa de negociación. Es probable que la aprobación de dicha ley en el Congreso resulte compleja.

Para atraer a los principales actores del Congreso, Petro ha propuesto la idea de establecer un «gran acuerdo nacional». Los liberales, los conservadores y el Partido de la U han querido unirse, al igual que muchas facciones menores, para tener mayor capacidad de influir, retorcer y distorsionar cualquier acuerdo que produzca mejoras económicas o ventajas políticas. Todo ello sugiere que los representantes de las principales facciones del capital de Colombia quieren modelar y orientar el gobierno de Petro en lugar de enfrentarse directamente a él. Esto deja al Centro Democrático de Uribe y a la escisión del Partido Verde liderada por Ingrid Betancourt, como oposición (los Verdes oficiales, por su parte, tienen el Ministerio de Educación).

Aunque el abrazo de oso de los partidos convencionales garantizará a las medidas de Petro las mayorías parlamentarias necesarias, es probable que las debiliten y diluyan. Por el momento, los liberales han propuesto legalizar la marihuana; Dignidad, una formación independiente de centro-izquierda, quiere reformar la enseñanza superior (Ley 30); y el Pacto Histórico propone eliminar la fracturación hidráulica y controlar el sector maderero. Los debates más importantes se producirán en octubre, cuando se negocie la aprobación de los presupuestos, en los que Petro pide 14 millardos de pesos más (pasando de los 391 millardos de Duque a 405 millardos, es decir, 90 millones de dólares).

Para lograr la paz hace falta el respaldo del ejército y la policía; y en un movimiento insólito, el ministro de Defensa de Petro, el exfiscal Iván Velásquez, retiró a una docena de oficiales y aceptó la renuncia de otros diez. Esta purga encaja en la propuesta de Petro de dar carpetazo al discurso del «enemigo interno» mantenido desde hace décadas por la contrainsurgencia y de desmilitarizar la vida social, lo cual incluiría eliminar la justicia penal militar y reubicar la policía en el Ministerio del Interior o en el de Justicia. Parece que el ESMAD se reformará, pero no será desmantelado: el gobierno planea transformarlo en una unidad de protección cívica durante las manifestaciones y se ha comprometido a seguir las directrices de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza.

Las ciudades y muchas áreas rurales de Colombia siguen afectadas por la multiforme violencia de la guerra. Tan solo en 2022 han sido asesinados noventa y nueve activistas sociales y la INDEPAZ ha informado de la comisión de setenta y dos masacres. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para sindicalistas, defensores de los derechos

humanos, periodistas y activistas medioambientales. Tiene 5,2 millones de personas desplazadas, el 10 por 100 de la población, una cifra solo superada por Siria y la República Democrática del Congo³⁸. ¿En qué medida se producirá un cambio a este respecto? En los primeros meses de presidencia de Petro una serie de masacres, evidentemente perpetradas por los Maracuchos, un grupo venezolano, han sacudido Bogotá. En otras partes del país, los supuestos autores han sido los disidentes de las FARC y los narcos mexicanos (en la matanza de siete policías en el Huila, por ejemplo). La situación de la seguridad pública es crítica y en lugar de disminuir, las masacres han aumentado desde el 7 de agosto, cuando Petro asumió el cargo.

¿Renovación económica?

El principal objetivo económico del gobierno de Petro es que el país deje de depender de los ingresos derivados de las materias primas, la economía del narcotráfico y el crimen organizado. El ministro de Hacienda, Ocampo, ha declarado, sin embargo, que Colombia necesitará esos ingresos; los inversores –y los rivales políticos de Petro– reaccionaron con alivio tras el nombramiento de Ocampo. Los combustibles fósiles suponen ahora mismo la mitad de las exportaciones legales de Colombia y Petro, que quiere apartarse gradualmente de ellos, planea prohibir futuras exploraciones de hidrocarburos y la minería a cielo abierto a gran escala, así como paralizar los proyectos piloto de fracturación hidráulica y perforación submarina, pero al mismo tiempo mantener los ingresos derivados de los ciento setenta contratos existentes para financiar sus programas sociales. Espera promover las fuentes de energía solar, eólica, hidráulica y de hidrógeno «verde» y recibir compensación internacional por dejar las reservas de petróleo y carbón en el subsuelo. Pero hablar de ecología es barato: los gobiernos de izquierda que dirigieron América Latina entre 1998 y 2012 empezaron entonando notas verdes, pero enseguida descubrieron que dependían de los ingresos energéticos y de las exportaciones de materias primas. ¿Se verá Petro obligado a seguir su senda?

El respaldo de los movimientos ecologistas y de los sindicatos de trabajadores del carbón y el petróleo sería crucial para lograr cualquier avance en este sentido. Por el momento no hay señales de que Petro planea movilizarlos. La nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez

³⁸ Internal Displacement Monitoring Centre, *Country Profile: Colombia*, Ginebra, 2022.

—nacida en Bogotá en 1982, geógrafa feminista y ecologista formada en la Univalle, con un doctorado por la Universidad de Copenhague— ha sido objeto de ataques constantes y ha tenido enfrentamientos tanto en el Congreso como con la prensa y los grupos de presión del petróleo, el gas y el carbón. La derecha uribista ha criticado su falta de formación en la industria minera, pero su viceministra, Belizta Ruiz, profesora en la Universidad Nacional Sede Manizales, tiene un doctorado en ingeniería eléctrica cursado en la UNAM, e investiga desde hace tiempo sobre las energías renovables en Colombia. Su primera tarea es la de reducir el precio de la energía en la costa del Caribe, que en algunas zonas subió el 40 por 100 en agosto. El gobierno planea también, sin embargo, eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, permitiendo que la gasolina suba a 18.000 pesos, algo menos de 4 dólares, por galón. El viceministro de Minas y Energía es Giovanni Franco, ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Colombia, que conoce en profundidad las complejidades técnicas del sector, cuyo desconocimiento los representantes del sector imputan a Vélez. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ha sido un faro en la izquierda política, defendiendo a los manifestantes en 2021, cuando era concejal de Bogotá.

Pero no hace falta resaltar el precio que habría que pagar por el abandono de la economía extractiva en el punto álgido de la actual recesión mundial, con la inflación y los precios de los combustibles elevados. La caída de los ingresos derivados de la exportación ejercería más presión sobre el peso colombiano, provocando la huida de capitales y una crisis monetaria, lo cual a su vez haría subir aún más la inflación. Se supone que el turismo —en especial el «ecoturismo»— debe desempeñar una función crucial en la financiación de la transición posextractivista a una economía de paz. Petro planea aumentar la capacidad aeroportuaria del país y atraer más turistas internacionales en la próxima década, pasando de 4,5 a 12 millones anuales, y convirtiendo a Colombia en una versión mucho mayor de Costa Rica. El crecimiento del turismo, sin embargo, depende principalmente del éxito de la agenda de paz y, dejando a un lado la contaminación generada por el aumento de los viajes aéreos, tiene un lado oscuro: el turismo sexual, en especial con menores, y la trata de mujeres, que florecen a plena luz del día en Cartagena y Medellín. ¿Se enfrentará por fin el gobierno central a las diversas mafias regionales que dirigen estos negocios de trata?

Un modelo de crecimiento basado en el capitalismo verde supondría efectuar cambios en la agricultura. En línea con los Acuerdos de La Habana, el gobierno planea efectuar una reforma agraria moderada, que incluya la redistribución de tierra a campesinos pobres, así como la devolución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Como en otras promesas de campaña, faltan los detalles. Desde la década de 1990, las importaciones de productos subvencionados, principalmente de Estados Unidos, han dañado al sector agrícola colombiano y obligado a los pequeños productores a trabajar en las plantaciones de coca como recolectores (*raspachines*) para ganarse la vida. Por eso Petro ha anunciado que revisará (aunque no renegociará) los acuerdos de libre comercio a lo que los funcionarios de Biden se han negado. El hecho de que la producción y el tráfico de drogas en Colombia estén controlados de manera creciente por organizaciones mexicanas complica aún más la imagen; por ahora, la política de «abrazos no balazos» aplicada por Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado. Desde el 7 de agosto Colombia sufre también una oleada de invasiones de tierras que barren todo el país. El poder de los grandes terratenientes en el sistema estatal regional podría limitar la capacidad de atender a la necesidad de tierras y Uribe está advirtiendo ya de que si el gobierno no interviene para solucionar los conflictos, los terratenientes no tendrán más opción que armarse. La ministra de Agricultura, Cecilia López, liberal incondicional que ya había ejercido el cargo con anterioridad, tiene su trabajo circunscrito y ha nombrado como viceministro a Luis Alberto Villegas, originario de Palmira, que tiene lazos con la industria azucarera.

La principal iniciativa gubernamental hasta la fecha es la propuesta presupuestaria de Ocampo, que asume la idea de Piketty de establecer un impuesto sobre el patrimonio que afectaría a aproximadamente diez mil colombianos –lo cual tal vez aceleraría el traslado de sus activos a Panamá, país utilizado desde hace tiempo por la oligarquía colombiana como paraíso fiscal– aplicando al mismo tiempo nuevos tributos sobre los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, que golpearían a los sectores de la clase trabajadora que menos pueden permitírselo. También se aumentarían los impuestos que gravan las pensiones mayores de 10 millones de pesos (2.300 dólares), las tierras fértiles no cultivadas, los dividendos, las exportaciones de petróleo, carbón y oro, la producción de café, las segundas viviendas y los productos importados no incluidos en los acuerdos de libre comercio, para incrementar el gasto social. Hay quien ha sugerido que esto representa la resurrección

de las propuestas de Carrasquilla, con unos cuantos añadidos progresistas. Petro planea también recortar el inflado presupuesto de defensa y por primera vez el ministro de Defensa, Velásquez, ha solicitado un recorte presupuestario de 800 millardos de pesos, que se asignarán al Ministerio de Hacienda.

Trayectorias

En el contexto regional Colombia ha servido durante mucho tiempo de base de operaciones para los intentos estadounidenses de desestabilizar Venezuela. En línea con Washington, Duque rompió relaciones en 2019 para reconocer como presidente al aspirante Juan Guaidó. Petro ha invertido dicha posición, poniéndose en contacto con Maduro para normalizar las relaciones. Ha pronunciado un duro discurso en la sede de Naciones Unidas, denunciando la adicción internacional al consumo de petróleo y carbón y la deforestación del Amazonas. Pero al mismo tiempo ha establecido un acuerdo con el Comando Sur a tenor del cual permite que helicópteros estadounidenses patrullen la cuenca del Amazonas, incumpliendo así el Artículo 173 de la Constitución de 1991. No obstante, la victoria de Petro inclina el equilibrio del poder regional hacia una mayor integración en América Latina. Más de media docena de países –México, Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Venezuela y Chile– han elegido coaliciones de izquierda, que cuestionan en mayor o menor medida la influencia de las multinacionales y el gobierno estadounidenses. La brecha existente entre las promesas de cambio progresista y la capacidad de aplicarlas es algo que el nuevo gobierno colombiano comienza a afrontar ahora, una vez terminada la luna de miel: la tasa de popularidad de Petro ha caído diez puntos desde agosto, cuando asumió el cargo, situándose en el 46 por 100. Las expectativas son muy altas y los muchachos y muchachas implicados en la primera línea de las protestas de los últimos años han dicho que, si Petro falla, las reanudarán de nuevo.

Como han demostrado las experiencias recientes de Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina, el éxito electoral no significa necesariamente el control sobre las palancas del Estado; las rutinas burocráticas de las instituciones y sus lazos estrechos con poderosos intereses sociales y económicos hacen que el cambio avance con lentitud, si es que avanza³⁹. A la luz de

³⁹ Véase el estudio analítico de Juan Carlos Monedero, «Francotiradores en la cocina. La teoría del Estado y el ciclo de izquierda en América Latina», *NLR* 120, enero-febrero de 2020.

la actual constelación de fuerzas, con un margen de victoria de solo el 3 por 100, Petro ha dejado claro que no contempla efectuar reformas más radicales en buena medida porque eso daría oportunidad a la extrema derecha de reagruparse y pasar a la ofensiva. Colombia tiene una de las clases dominantes más violentas y mafiosas de la región y algunas de sus facciones –uribistas, pero no en exclusiva– mantienen lazos estrechos con el ejército, las estructuras paramilitares y las redes de narcotráfico. Petro ha intentado incluir en su gobierno a todos, excepto la extrema derecha uribista. Al darle la mano al *establishment*, sin embargo, podría perder el brazo.

Queda por ver si Petro querrá o podrá crear un frente de izquierda amplio, que incluya iniciativas de los sindicatos, los movimientos sociales, los colectivos feministas y las organizaciones vecinales, y que movilice a esos electorados potenciales en defensa de dichas reivindicaciones; todo podría depender de cómo se desenvuelvan las relaciones con la vicepresidenta Márquez. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, es una radical convencida que procede del movimiento sindical y feminista, que cuenta con una sólida experiencia en el Congreso. ¿Puede poner en marcha una reforma progresista de la normativa laboral y encarar la cuestión del empleo informal? ¿Puede construir una base electoral que defienda dicha reforma? En educación, el gobierno podría, en teoría, establecer alianzas con el sindicato de docentes, Fecode. Pero teniendo al exministro de Salud de Santos, Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, es de prever que introduzca el neoliberalismo por la puerta de atrás, como ocurrió durante la presidencia de aquel. Gaviria ya ha declarado ante el Senado que la matrícula gratuita universal no está sobre la mesa y que todavía no se ha hablado de las deudas por préstamos para el estudio, a pesar de estar proyectado que Educación reciba el mayor presupuesto de todos los ministerios (54,7 millardos de pesos). Aunque cercana a la vicepresidenta Márquez, la viceministra de Educación, Aurora Vergara, afrocolombiana y joven estrella académica en ascenso, no tiene experiencia profesional en la educación pública. Si bien la exrepresentante estudiantil Jennifer Pedraza está ahora en el Congreso y ha presentado una propuesta para reformar la Ley 30, es difícil ver qué alianza podría establecerse entre el Ministerio de Educación y la mayoría del movimiento estudiantil.

En el ámbito de la sanidad pública, un aliado probable es el Movimiento por la Salud, que rechaza la neoliberalización del sistema sanitario y

trabaja desde hace tiempo para encontrar políticas alternativas. Carolina Corcho, la ministra de Salud, es psiquiatra de profesión y experta en investigación sobre violencia urbana. Planea unificar el sistema contributivo y el subsidiado en un solo sistema público universal, habiendo afirmado que las aseguradoras privadas no han cubierto el derecho constitucional a la salud, y quiere asignar a los secretarios de salud de municipios y departamentos recursos para la creación de unidades móviles que permitan atender a múltiples comunidades. El debate sobre la sanidad está previsto para 2023, lo cual dará a Corcho y su equipo tiempo para preparar el enfrentamiento con el grupo de presión de las aseguradoras y con los representantes políticos que estas tienen en el Congreso.

¿Superará finalmente Colombia su modelo político excluyente, uniéndose a sus vecinos en la toma en consideración de las necesidades de fuerzas sociales rurales y urbanas más amplias? ¿O resultará el gobierno de Petro un experimento de corta duración, arrollado por las fuerzas militarizadas del conservadurismo que quieren confinar a Colombia en su solitaria senda histórica? Al resaltar la importancia de los factores endógenos en la historia colombiana contemporánea, hemos analizado la reproducción en serie de modelos de dominio oligárquico excluyente registrados desde el siglo XIX hasta la Guerra Fría y de ahí a la era de la contrainsurgencia. Mientras el sistema político bipartidista hacía aguas, fue el uribismo el que, paradójicamente, hizo de escoba, barriendo los restos del sistema posterior a 1848, al tiempo que dependía de la potencia de fuego y de los fondos estadounidenses para aplicar su programa contrainsurgente. Al hacerlo, el uribismo sentó inconscientemente las bases del santismo, que asumió el instrumento político de Uribe y lo usó para negociar la rendición de las FARC. Aun así –y este es nuestro segundo argumento, relacionado con el anterior– una vez abiertas las compuertas de la paz con los Acuerdos de La Habana de 2016 no hubo manera de cerrarlas. El gobierno y los medios de comunicación dominantes ya no podían tachar la resistencia de la izquierda urbana de «terrorismo guerrillero» o «vandalismo». Las protestas populares, los paros y las movilizaciones enterraron el uribismo y ayudaron a que el petrismo sustituyera al santismo como mejor opción para forjar una paz y un cambio social duraderos.

Aunque es demasiado pronto para saber si emergerá una nueva agenda para las ciudades colombianas, por primera vez se da esa posibilidad. Quizá ahora se ha vuelto posible imaginar un bloque histórico en el que

el capital se vea obligado a hacer concesiones, pagar impuestos y cumplir las leyes del Estado. Más difícil es ver cómo podrán reformarse la policía y las fuerzas armadas y la obstinación de estas puede convertirse en un obstáculo significativo, aunque dependerá en buena parte de la capacidad de Leyva, el ministro de Relaciones Exteriores, para negociar con Washington un nuevo acuerdo sobre comercio y antidrogas.

La sangrienta historia de guerra prolongada en un marco constitucional republicano, alimentada y financiada en los últimos cuarenta años por las exportaciones de drogas ilegales, diferencia a Colombia de sus vecinos regionales, aunque puedan establecerse ciertos paralelismos con Perú y México, así como con Centroamérica (de hecho, el desastroso Plan Mérida, aplicado entre 2006 y 2010 en México seguía el modelo del Plan Colombia)⁴⁹. En Colombia, el gobierno de Petro se ha impuesto la tarea de reconstruir el país de acuerdo con los derechos sociales, culturales y ambientales recogidos en la Constitución de 1991. En ese sentido, Colombia podría compararse a Bolivia y Ecuador, ambos con constituciones progresistas aprobadas tras luchas sociales titánicas que llevaron al poder a gobiernos progresistas y que suscitaron reacciones parcialmente exitosas de la extrema derecha. La propuesta de «acuerdo nacional» hecha por Petro puede interpretarse como un intento de impedir preventivamente ese resultado. El peligro está en que su gobierno haga concesiones sin obtener compromisos de paz y programas sociales, incluida la creación de puestos de trabajo. Pero por una vez, Colombia y sus vecinos de hemisferio parecen sincronizados en cuanto a su política democrática radical y a sus ciclos de lucha popular, lo que podría derivar en una mayor cooperación interestatal en toda la región. Si Colombia ayudara a resucitar el proyecto neobolivariano, aun modificado de uno u otro modo, quizá Chávez –y no digamos Fidel Castro– no dejarían de reírse en sus tumbas por las vueltas que dan algunas cosas en América Latina.

⁴⁹ Benjamin Smith, *The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade*, Nueva York, 2021; Carlo Nasi, *Cuando callan los fusiles. Impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica*, Bogotá, 2007.